

---

# Chile 2010

## *In Crescendo.* Informe de coyuntura sobre conflicto social

### MÓNICA IGLESIAS VÁZQUEZ

Licenciada en Sociología. Maestra en Estudios Latinoamericanos y doctoranda de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

---

#### Resumen

2010 fue el año en que, por primera vez en dos décadas, la Concertación perdió unas elecciones presidenciales. El nuevo jefe del Ejecutivo, Sebastián Piñera, heredó una serie de conflictos y deudas sociales arrastrados por los sucesivos gobiernos de la Concertación, mostrando una prevista y notoria continuidad en la manera de encararlos. En este extenso análisis de la conflictividad social durante al año, la autora encuentra tres acontecimientos –cambio de gobierno, terremoto y “accidente” minero– que cambiaron las coordenadas que la acción colectiva venía presentando hasta ahora; realizando una clasificación analítica de dichos conflictos en político-territoriales (entre los que se cuentan también los socio-ambientales), laborales, educacionales, políticos y económico-sociales. Señalando la huelga de hambre mapuche como el hecho más relevante en términos de protesta y movilización social, analiza la serie de circunstancias que llevaron a este clímax conflictual, al que se ubica como el conflicto político-territorial de mayor impacto.

---

#### Abstract

The year 2010 marked the first time *Concertación* lost presidential elections in two decades. The new head of the executive, Sebastián Piñera, has inherited a series of conflicts and unmet social obligations that were never addressed by successive *Concertación* administrations. This is testimony to its planned and notoriously continued approach to such issues. In an extensive analysis of the social conflict throughout the year, the writer finds three events –the new administration, the earthquake and the mining “accident”– changed the approach of collective action as seen up to now. The writer also classifies those conflicts from an analytical perspective in terms of political and territorial (including socio-environmental), labour, educational, political, and socio-economic. With the mapuche hunger strike as the most salient event in terms of protest and social mobilization, she focuses on the circumstances which led to such a climactic conflict, ranked as the event of highest impact in the political and territorial arena.

### Palabras clave

Conflicto chileno-mapuche, elecciones, terremoto, tomas de tierras, termoeléctricas - Militarización

### Keywords

The Chilean-mapuche conflict, elections, earthquake, land occupation, thermoelectric plants - militarization

### Cómo citar este artículo

Iglesias Vázquez, Mónica 2011 "Chile 2010: *In crescendo*. Informe de coyuntura sobre conflicto social" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XII, N° 29, mayo.

---

### Introducción: 2010 un año de movilizaciones

Presentamos a continuación un informe de coyuntura acerca de los episodios de conflicto social con mayor impacto, ocurridos en Chile durante el año 2010. Los dos primeros meses del año –meses estivales y en los que, por ese motivo, desciende habitualmente la actividad de los diversos actores sociales–, estuvieron marcados por la contienda electoral, después de la primera vuelta efectuada el 13 de diciembre de 2009<sup>1</sup>, en la que obtuvieron los mayores porcentajes de votación Eduardo Frei Ruiz-Tagle (29,6%), por la coalición gobernante durante los últimos veinte años, la Concertación<sup>2</sup>, y Sebastián Piñera (44,06%)<sup>3</sup>, por la Alianza por Chile<sup>4</sup>. La segunda vuelta quedó fijada para el 17 de enero y las promesas electorales, los debates entre ambos candidatos y los pronósticos para la votación definitiva acapararon todos los focos en esos primeros días del año. El desgaste de la Concertación después de dos décadas en el ejercicio del poder, con graves deudas sociales e históricas perpetuadas, promesas incumplidas, acusaciones de malversación de fondos y corrupción, y fuertes divisiones, por un lado; y los esfuerzos de la derecha por presentarse unida y renovada, moderna, exitosa, progresista y despejada de su cara pinochetista, a cuya labor se abocó con denodado ánimo el “flamante” candidato de la Alianza<sup>5</sup>, por el otro, hicieron posible el triunfo electoral de ésta última, con un 51,61% de los votos, frente al 48,39% que obtuvo el candidato de la Concertación<sup>6</sup>. Sin embargo, como fue evidenciado en la campaña electoral, las diferencias entre el candidato de la Concertación y el de la Alianza, no eran significativas en muchos terrenos: principalmente en el económico y social. El impacto de su triunfo residía en el ámbito simbólico: la derecha (en gran parte, los herederos directos de Pinochet) volvía a ganar unas elecciones después de 52 años.

Con posterioridad al triunfo del multimillonario empresario Sebastián Piñera y fundamentalmente hasta el momento de su ascensión del cargo de presidente, el 11 de marzo, se produjeron algunos altercados por parte de colectivos y organizaciones sociales y políticas que exigieron responsabilidades a la Concertación por su derrota (principalmente las Juventudes Socialistas y de la Democracia Cristiana)<sup>7</sup>. Sin embargo, el terremoto de 8.8 grados en la escala Richter acontecido en Chile el 27 de febrero y el posterior tsunami<sup>8</sup> dejaron al país conmocionado y *terremoteado*, casi en estado de *shock*; durante los primeros días las manifestaciones

colectivas se “congelaron” o se dirigieron fundamentalmente hacia las tareas de rescate y sobrevivencia en la catástrofe. Sin embargo, esta nueva y dramática situación brindó una oportunidad para poner al descubierto algunos de los principales déficits sociales y políticos en Chile y favoreció la emergencia de fenómenos que, si bien no entran dentro de lo que estrictamente consideramos acción colectiva, contribuyeron a generar procesos de protesta y organización social. Nos referimos a lo que fue calificado por la prensa oficialista y el gobierno como “pillaje y saqueos” protagonizados por grupos de personas o individuos solos, aprovechando el caos generado por los fenómenos naturales en las regiones afectadas. Hay que “evitar con todos los medios el pillaje, la delincuencia y los asaltos que se están produciendo en estos momentos en aquellos lugares donde la fuerza policial no ha podido restablecer el orden público”, dijo Piñera la noche siguiente al terremoto, cuando todavía no asumía<sup>9</sup>.

La situación generada a raíz del terremoto también develó el carácter autoritario y militarizado del régimen neoliberal chileno (antes y después de la Concertación). Se declaró el estado de catástrofe en las regiones del Maule y del Biobío, lo cual significó que las Fuerzas Armadas asumieran el control de la “seguridad” en la zona durante 30 días; además se decretó el toque de queda en las ciudades de Concepción y Talcahuano. Se reforzó el personal de Carabineros y de las Fuerzas Armadas en 10 mil efectivos. El gobierno, entonces, sacó al Ejército a las calles, en primer lugar y sobre todo, para garantizar el “orden” a cualquier precio<sup>10</sup>.

Las promesas en materia de seguridad pública –garantizar el orden público, acabar con la delincuencia, poner fin a la puerta giratoria<sup>11</sup>, etc.– habían distinguido gran parte de la campaña de Sebastián Piñera y, posteriormente, de su programa de gobierno. Por eso, entre sus medidas está la de aumentar, durante su legislatura, en 10 mil efectivos la dotación de Carabineros<sup>12</sup>. No obstante, la mayor presencia policial fue notoria desde un inicio, no sólo en el “combate frontal contra la delincuencia”<sup>13</sup> –como arguye el presidente–, sino también en el control y represión de las protestas y movimientos sociales. El 29 de marzo –Día del Joven Combatiente, en el que se conmemora el asesinato de los hermanos Vergara Toledo durante la dictadura militar– se escenificó un impresionante despliegue militar y policial, absolutamente desproporcionado, que incluyó incluso el injustificado toque de queda en la ciudad de Concepción. En Santiago, 13 mil efectivos salieron a las calles copando los “puntos críticos”, disolviendo inmediatamente los grupos de más de 3 personas y movilizandolos en carros hidrantes<sup>14</sup>. El operativo se repitió el 1º de mayo, a propósito del Día del Trabajo, en la primera manifestación masiva bajo el gobierno de Piñera<sup>15</sup>.

Una vez que los efectos devastadores del terremoto perdieron su carácter de novedad y que se implementaron los programas del gobierno para hacer frente a la situación de excepción, las manifestaciones de carácter laboral (huelgas y paros de mineros, empleados públicos, trabajadores del sector privado, estibadores), por reivindicaciones económico-sociales (huelgas por las alzas tarifarias), de tipo político-territorial (huelga de hambre mapuche, tomas rapa nui) en muchos casos imbricadas con las socio-ambientales (luchas contra las termoeléctricas y otros megaproyectos) y de carácter educacional fueron emergiendo en los siguientes meses a medida que se asentaba la nueva administración y se iban conociendo

los planes y programas de gobierno para las áreas específicas. El clima de movilización social fue en ascenso durante la segunda mitad del año y hacia inicios de diciembre “había 30 huelgas [legales]<sup>16</sup> en curso, las que incluían a casi cinco mil trabajadores”<sup>17</sup>. Sin duda el año 2010 fue el de la victoria de la huelga de hambre mapuche, el del aumento de la combatividad de las movilizaciones sociales y del incremento del número de huelgas.

## **“Sin duda el año 2010 fue el de la victoria de la huelga de hambre mapuche, el del aumento de la combatividad de las movilizaciones sociales y del incremento del número de huelgas”**

### **Conflictos político-territoriales**

Incluimos bajo esta categoría aquellos conflictos que tienen que ver con la disputa por el territorio; en general se trata de fenómenos sumamente complejos que involucran a los pueblos originarios, por lo que su lucha trasciende el carácter exclusivamente territorial: son conflictos políticos también, pues reivindican el derecho a la autodeterminación, la autonomía política y la soberanía sobre un territorio que les pertenece por derecho ancestral y que les fue usurpado durante la Conquista o, más recientemente, en el período de formación de la República. No nos convence la denominación de “conflicto indígena” (o como ha acuñado la prensa oficialista chilena: “conflicto mapuche”) porque atribuye toda la responsabilidad de la situación de confrontación a un solo actor: la víctima además; por lo que contribuye a formar una imagen distorsionada e interesada del conflicto.

También consideramos aquí los conflictos de tipo socio-ambiental, que en muchas ocasiones están profundamente imbricados con los anteriores, pero que pueden diferenciarse: se trata de las luchas por la defensa de los ecosistemas, en contra de los proyectos propios de un modelo económico destructivo de la naturaleza y de las formas de vida locales. A este tipo de luchas están abocadas muchas comunidades –indígenas o no– así como ciudadanos y organizaciones ecologistas.

### **El desbordamiento mapuche: 82 días en huelga de hambre<sup>18</sup>**

En enero inició el proceso de formalización de los 15 mapuche imputados y detenidos por el supuesto ataque a la caravana policial del “fiscal especial de causas indígenas”, Mario Elgueta<sup>19</sup>. Casi al mismo tiempo, la Justicia militar condenó a dos años de pena remitida al cabo de Carabineros Walter Ramírez por “delito de violencia innecesaria con resultado de muerte” en el caso del asesinato de Matías Catrileo –luchador mapuche– ocurrido en enero de 2008<sup>20</sup>, lo que significaba que el policía no tendría que ir a prisión. La concurrencia de ambos acontecimientos ponía al descubierto la impunidad existente y la criminalización de los mapuche, produciendo gran indignación en la familia y sus comunidades.

La respuesta del gobierno de la Concertación a la situación de conflicto que se vive en La Araucanía (IX Región)<sup>21</sup> siguió siendo la militarización: el 1º de febrero se incrementó en 200 efectivos el contingente de antimotines de Carabineros (po-

licia militarizada) en la zona. Ese día tuvieron lugar dos incendios en la comuna de Ercilla: uno en una escuela abandonada; otro en un galpón en donde se guardaban enseres agrícolas. Y a finales de ese mes la comunidad Ayün Mapu procedió a la recuperación del fundo San Miguel, de 500 hectáreas, en las comunas de Cañete y Tirúa (en la VIII Región del Biobío). En esa toma estuvo presente la Alianza Territorial Mapuche (ATM)<sup>22</sup>, cuyos voceros anunciaron que pronto retomarían las movilizaciones a nivel de todo el *Meli Wixan Mapu* (los cuatro puntos de la tierra; el territorio mapuche ancestral)<sup>23</sup>. La confrontación siguió en aumento.

Con la asunción de los nuevos representantes políticos, la designación del Intendente y los gobernadores, éstos trataron de minimizar el conflicto que se vive en algunas comunidades mapuche, insistiendo en calificar a algunos comuneros como conflictivos y delincuentes y ajenos a la “idiosincrasia” de la mayoría del pueblo mapuche. De esta manera trataron de rebajar el carácter del conflicto y de las reivindicaciones legítimas de las comunidades afectadas.

El 23 de abril se produjo la primera “recuperación de tierras” durante el gobierno de Piñera. La Alianza Territorial Mapuche le envió una carta al presidente en la que solicitaba un “diálogo político efectivo” y le daba el plazo de un mes para responder a su misiva. Ante la falta de interés del gobierno, y mientras continuaban las detenciones de mapuche en La Araucanía, sobre todo en relación con acontecimientos que habían tenido lugar el año anterior (como el asesinato de Jaime Mendoza Collío), la ATM retomó las acciones de protesta realizando numerosos cortes relámpago de caminos y carreteras. Ante el ascenso de las movilizaciones, a finales de mayo Sebastián Piñera<sup>24</sup> visitó la novena región y proclamó “una nueva política para los pueblos originarios, con especial énfasis en el problema mapuche”<sup>25</sup>. El presidente reiteró su compromiso con el Plan Araucanía, mismo que ya había anunciado durante su campaña, y delineó algunas medidas: la construcción de 300 km de caminos en un año, duplicar las atenciones de salud intercultural, dotar de electricidad a mil familias, erradicar el analfabetismo infantil, reponer servicios de agua potable rural y destinar 4.300 millones de pesos a la reactivación económica. Pero no dijo una sola palabra de la devolución de tierras a las comunidades mapuche. El vocero de la ATM, Mijael Carbone, manifestó al respecto: “nos prometen agua potable, educación, salud y un nuevo plan para la Araucanía, es decir, exactamente lo mismo que nos prometía la Concertación”. Y concluyó: “¡Si no hay acuerdo en el tema de las tierras, continuamos con las movilizaciones!”<sup>26</sup>. La ATM reinició las movilizaciones el 7 de junio<sup>27</sup>. Hizo público un comunicado en el que reconocía la autoría de doce cortes de carretera: “12 cortes de carreteras efectuaron nuevamente diversos *lofche* [comunidades] en defensa del *territorio*. Como es sabido, la movilización de mayo reciente generó la visita del presidente chileno a *nuestro territorio* intentando distraer con anuncios irrelevantes e *inconsultos*. La autoridad del país *invasor* incumple así la ley chilena y el derecho internacional<sup>28</sup>. Debe entender que sin *diálogo*, ni sus más dorados *subsídios* servirán”. Los comuneros denunciaron también que “el bloqueo comunicacional es cada vez más grave”<sup>29</sup>.

El 12 de julio 32 presos mapuche –autodenominados “presos políticos”– de los penales de Concepción, Lebu, Temuco, Angol y Valdivia se pusieron en huelga de hambre. En ese momento había en las cárceles chilenas 58 personas mapuche, o relacionadas con la causa mapuche, procesadas por la ley Antiterrorista, de las

cuales 5 estaban condenadas, 42 en prisión preventiva y 11 cumpliendo medidas cautelares<sup>30</sup>. Los presos mapuche adoptaron esta extrema medida para evidenciar las irregularidades en torno a sus procesos judiciales y para denunciar la represión y criminalización del pueblo mapuche. En un comunicado señalaban que el Estado chileno “*en defensa del empresariado comprometido en el conflicto con nuestro pueblo y en su afán de perseguir y aniquilar el movimiento mapuche, ha criminalizado la justa lucha de las comunidades, encarcelando y ensañándose en contra nuestra, imponiendo severas leyes dictatoriales*”<sup>31</sup>.

Las medidas que exigían para deponer el ayuno eran la no aplicación de la Ley Antiterrorista (Ley 18.314/84) a los conflictos que afectan a las comunidades mapuche en el marco de una política de recuperación de sus tierras<sup>32</sup>; la no concurrencia de la justicia militar en los casos en los que estaban involucrados civiles<sup>33</sup>; el fin de los montajes político-judiciales y de los “testigos sin rostro”; y, finalmente, la desmilitarización de las zonas mapuche en donde las comunidades reivindican derechos ancestrales políticos y territoriales.

Tras un prolongado silencio y silenciamiento por parte del gobierno de la huelga de hambre que sostenían los presos políticos mapuche<sup>34</sup>, así como la indiferencia por parte de la mayoría de sectores sociales hacia esa situación, a mediados de agosto ésta comenzó a “ser noticia”<sup>35</sup>. Los familiares de los presos –organizados–, tras numerosas movilizaciones y llamados de solidaridad a la comunidad nacional e internacional, lograron romper el cerco mediático. Con esta acción los presos generaron un movimiento de solidaridad sin precedentes en su trayectoria política y social. Numerosas expresiones de apoyo (manifestaciones, concentraciones, recogida de firmas, *performances*) se sucedieron en distintos países del mundo, así como actos de protesta contra la política gubernamental. Intelectuales, artistas, escritores, entre otros, exigieron el respeto al pueblo mapuche y a los acuerdos internacionales firmados por el gobierno chileno<sup>36</sup>. En ese contexto, las acusaciones entre la oposición y los representantes gubernamentales estuvieron a la orden del día. Ciertamente el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche estaba siendo heredado por la nueva administración, quien con su política represiva no hacía más que perpetuarlo e intensificarlo. En la Concertación –absolutamente dividida y desarticulada– se oyeron *mea culpa* (como el de la ex vocera del gobierno de Michelle Bachelet, Carolina Tohá) y desaforadas defensas de su proceder político (como la del ex ministro del Interior, Pérez Yoma, quien definió la huelga de hambre como “una huelga de un grupo violentista para llamar la atención”<sup>37</sup> y defendió la invocación de la Ley Antiterrorista durante su gestión al frente del Ministerio).

El gobierno, a partir de entonces, hizo reiterados llamados a que los comuneros mapuche depusieran la huelga de hambre con la promesa de enviar al Congreso una propuesta de modificaciones a la Ley Antiterrorista. Por otra parte, la crispación entre gobierno y oposición fue máxima cuando, el 9 de septiembre, cuatro diputados de la oposición<sup>38</sup>, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, decidieron protagonizar un ayuno (aprovechando una visita a los presos de la cárcel de Temuco)<sup>39</sup>, mismo que no alcanzó a durar 5 días<sup>40</sup>.

El 14 de septiembre monseñor Ezzati, arzobispo de Concepción, asumió como mediador entre el gobierno y los comuneros mapuche. El gobierno parecía tomar cartas en el asunto: Piñera anunció, en la ceremonia del Bicentenario de la Inde-

pendencia, la instalación de una mesa de diálogo para el 24 de ese mes con el propósito de intentar resolver el “conflicto mapuche”, misma que era solicitada por los familiares de los presos políticos mapuche y otros actores sociales y a la que se había negado hasta el momento. Sin embargo, la mesa se proponía, concretamente, para abordar el denominado “Plan Araucanía” (proyecto asistencialista con el que se pretende combatir la pobreza) y no la huelga de hambre o las reivindicaciones que la motivaron. Por lo mismo, los voceros de los presos mapuche no participaron en la mesa, como tampoco monseñor Ezzati (quien envió a un representante en su lugar), al considerar que aquella no tenía relación directa con la huelga de hambre y que más bien constituía una estrategia comunicacional del gobierno para hacer creer que estaba dispuesto a dialogar. No obstante, el día previo a la mesa de diálogo tuvo lugar el primer encuentro entre los voceros de los presos políticos y el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, en casa del arzobispo de Concepción<sup>41</sup>. El Ejecutivo ofreció retirar las querellas en las que había invocado la Ley Antiterrorista en las causas que involucraban a los ayunantes; así como enviar un proyecto de ley estableciendo modificaciones a la Ley Antiterrorista. Los voceros de los presos políticos mapuche rechazaron la oferta y postergaron las negociaciones<sup>42</sup>. Tras el fracaso del primer intento de diálogo, la presión para el gobierno fue en aumento y la situación de los presos en huelga de hambre adquirió el máximo dramatismo, al punto de que empezó a hablarse de un posible muerto en cualquier momento. Muchos presos permanecían hospitalizados por diversas complicaciones. Si bien la Corte Suprema autorizó a Gendarmería a alimentar por la fuerza a los huelguistas; el respaldo social a la huelga de hambre y el cuestionamiento del proceder del gobierno no hizo “recomendable” aplicar esa medida<sup>43</sup>.

Las reuniones entre los voceros de los presos políticos mapuche se multiplicaron; comenzó a hablarse de diversas posturas al interior del colectivo. Los voceros consideraron insuficiente el ofrecimiento del gobierno (porque el hecho de que él retirara las querellas en las que invocaba la Ley Antiterrorista no significa que el Ministerio Público fuera a hacer lo mismo) y solicitaron entonces incorporar a las conversaciones al Congreso y al Ministerio Público. El gobierno consideró que esas nuevas peticiones escapaban a su ámbito de gestión y que inmiscuirse en otro poder del Estado era inconstitucional. Por otra parte, monseñor Ezzati abandonó la mesa de diálogo<sup>44</sup>.

El gobierno maniobró entonces, muy hábilmente, para reunirse con los voceros por separado, en dos mesas paralelas: una en Concepción y la otra en Temuco. Tras esas reuniones, el 1º de octubre, veintitrés comuneros de Concepción, Lebu, Temuco y Valdivia a los que sumó uno en la cárcel de Angol, depusieron la huelga de hambre<sup>45</sup>. El acuerdo entablado con el Ejecutivo incluía el compromiso de éste de retirar, en un plazo de cinco días, las querellas por Ley Antiterrorista, mismas que serían substituidas por otras relativas a delitos comunes. El gobierno también se comprometió a promover reformas a la Justicia Militar para impedir el doble enjuiciamiento<sup>46</sup>.

No tomaron la misma decisión, en cambio, diez comuneros de Angol y Victoria (quienes habían comenzado 14 días más tarde la huelga), a los que finalmente se sumó uno de Lebu, por considerar insuficientes las promesas del gobierno<sup>47</sup>;

decidieron continuar con la medida de presión, evidenciando así, en los hechos, la fractura a nivel de las vocerías de los presos políticos mapuche<sup>48</sup>. También mantuvieron la huelga de hambre los dos menores que se habían sumado desde el 1º de septiembre, internados en el Centro de Reclusión de Menores de Chol-Chol. No obstante, tras el logro del gobierno al conseguir que una parte importante de los comuneros depusiera la huelga de hambre, éste volvió a implementar la política combinada de silenciamiento e indiferencia absoluta con los presos que no desistieron de su acción y la criminalización de ese sector, calificándolos de extremistas, radicales e intransigentes. Los medios de comunicación oficialistas, por su parte, optaron por la desinformación en relación con los motivos que forzaron a una parte de los presos políticos mapuche a seguir en huelga de hambre. El cerco mediático se cernió otra vez sobre los huelguistas y una semana después, la difícil situación física en la que se encontraban hizo que, “por razones humanitarias”, decidieran también finalizar la huelga de hambre<sup>49</sup>; señalando, no obstante, que la finalidad de la huelga, en su caso, siempre tuvo que ver con lo que esperan “para el futuro de nuestro Pueblo Nación Mapuche”<sup>50</sup>, es decir, un propósito más estructural, que trasciende sus situaciones judiciales particulares.

En noviembre comenzaron los juicios orales<sup>51</sup> por una de las causas que involucra a más presos mapuche: el supuesto ataque al fiscal Mario Elgueta cuando “se encontraba liderando un masivo allanamiento a una comunidad en el sector de Puerto Choque, municipio de Tirúa”<sup>52</sup>. Los juicios han seguido hasta el día de hoy con el desfile de treinta y cinco testigos encubiertos, y otras arbitrariedades amparadas en la Ley Antiterrorista<sup>53</sup>.

La lucha del pueblo mapuche tuvo logros significativos este 2010: fue capaz de romper el cerco mediático, de situarse en el máximo nivel nacional de discusión, involucrando a numerosos sectores políticos y sociales que habían permanecido hasta el momento al margen; develó la errónea y criminal política de los gobiernos de la Concertación; comprometió al gobierno de Piñera a definir su trato hacía los pueblos indígenas; y alcanzó una gran repercusión internacional. Todo ello deberá ser capitalizado a favor de las reivindicaciones de los distintos sectores y organizaciones mapuche que están en pie de lucha. Este proceso de concientización desembocó a finales de año en el inicio del procedimiento de legalización del partido mapuche Wallmapuwen –cuyas reuniones habían comenzado ya en 2005–, como instrumento de lucha política, demostrando así el salto cualitativo que ha dado la resistencia tenaz y versátil de este pueblo.

### **Rapa Nui: el despertar en el ombligo del mundo**

Durante el 2010 se produjo otro conflicto de carácter étnico y político, en este caso en la lejana Isla de Pascua<sup>54</sup>. Algunos clanes rapa nui, descendientes de los pobladores originarios de la isla, realizaron tomas de terrenos, así como ocupaciones de edificios privados y fiscales, reclamando que los lugares en donde estaban emplazados les pertenecían. El 27 de julio se produjo la toma del Ministerio de Bienes Raíces y a partir de ahí, las ocupaciones de tierras se sucedieron llegando a ocupar treinta y cinco terrenos en menos de un mes<sup>55</sup>. Por otra parte, la plaza de la Gobernación ya estaba tomada desde el 16 de abril, cuando un grupo de familias rapa nui exigió la destitución del recién nombrado gobernador de la Isla, Pedro Ed-

munds, uno de los pocos democratacristianos fichados por Piñera para altos cargos en su gobierno, quien entregó “voluntariamente” el puesto el 9 de agosto, con el propósito de “facilitar los acuerdos para zanjar el conflicto desatado en la isla”<sup>56</sup>.

Paralelamente a la huelga de hambre mapuche el conflicto fue enconándose en la Isla de Pascua; sin embargo, las familias rapa nui no lograron ni con mucho el mismo impacto mediático. Como única respuesta a las tomas y ocupaciones, el gobierno regional envió desde Valparaíso –región a la que pertenece administrativamente la Isla de Pascua–, una nueva dotación de Carabineros, a pesar de afirmar que “todas las tomas son más bien simbólicas”<sup>57</sup>, enardeciendo aún más, con los dichos y los hechos, los ánimos de los pobladores. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, realizó varias visitas a la zona, así como el gobernador de Valparaíso. Las exigencias de las familias que, demostraron una gran coordinación en sus acciones, son la devolución de los territorios sobre los que reclaman derechos ancestrales y que, según denuncian, fueron usurpados por el Estado chileno en distintos momentos de la historia, por la fuerza o mediante artimañas jurídico-legales. Además, exigen cambios en el estatuto administrativo de la Isla y un aumento en el control migratorio, pues consideran que hay un exceso de visitantes que pone en riesgo la sostenibilidad de la Isla, de sus lugares sagrados –convertidos en templos del turismo– y que, junto con el turismo –principalmente con el chileno–, han llegado también otros problemas: “hoy día no tenemos la seguridad de vivir” y “estamos llenos de delincuentes acá en Rapa Nui”, dijo el presidente del Parlamento Rapa Nui<sup>58</sup>.

El 12 y 13 de septiembre tuvo lugar una reunión entre representantes del Parlamento Rapa Nui y el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. La principal exigencia de los rapa nui fue la recuperación de tierras y la entrega a las autoridades locales de la facultad de controlar la migración de chilenos continentales a Isla de Pascua. Ubilla comentó que “la situación de las reclamaciones territoriales es sólo una de las cuatro grandes líneas de acción de las mesas de diálogo que se están realizando con los habitantes de la isla”, reduciendo, así, el alcance del conflicto<sup>59</sup>. De no cumplirse con esta reivindicación, los rapa nui ya habían planteado la posibilidad de pedir la independencia de Chile: “El pueblo rapa nui tiene que administrar su propiedad en conjunto con el gobierno. Si el gobierno no nos hace caso, nosotros nos vamos al Pacífico, nosotros ya firmamos un tratado con la Unión Polinesia [...] Nos vamos para allá porque el gobierno de turno no ha cumplido con el pueblo rapa nui”<sup>60</sup>.

Las reuniones se sucedieron sin mucho éxito, con estrategias dilatorias por parte del gobierno y aplicando la vieja táctica del “divide y vencerás”, que ya había funcionado en el caso de la huelga de hambre mapuche. Así, el gobierno, a través de la mediación de Rodrigo Hinzpeter, llegó a un acuerdo el 22 de octubre, con una parte importante de los representantes (250) rapa nui al comprometer una partida de 131 mil millones de pesos chilenos<sup>61</sup> para mejorar las condiciones de vida en la Isla, así como un proyecto de ley para mejorar el procedimiento de entrega de tierras y la promesa de avanzar hacia una mayor autonomía de la Isla<sup>62</sup>. Paradójicamente, semanas antes LAN había anunciado el estreno de la línea aérea Lima-Isla de Pascua, lo que permitiría un aumento de tres mil turistas para el próximo verano 2011<sup>63</sup>. No obstante, algunas familias –pertenecientes al Parlamento Rapa

Nui— no se mostraron conformes con el acuerdo y no abandonaron la toma<sup>64</sup>. El 3 de diciembre la policía efectuó un violento desalojo de un inmueble fiscal ocupado (que estaba destinado a residencia de los funcionarios del poder Judicial), dejando un saldo de decenas de heridos: 14 carabineros lesionados, uno de ellos de gravedad; y 18 isleños heridos, 9 de ellos hospitalizados<sup>65</sup>. Posteriormente, el 29 de ese mismo mes, en un nuevo violento desalojo expulsaron a los rapa nui de la plaza principal de Hanga Roa, la capital de la Isla<sup>66</sup>.

A pesar de las legítimas reivindicaciones de los pobladores rapa nui, el gobierno actuó de forma violenta, usando la fuerza de las armas, desconociendo a las autoridades locales y negándose a un diálogo franco y honesto. El pueblo rapa nui demostró, en este caso, una gran capacidad organizativa que le permitió tener tomada la capital de Isla de Pascua durante varios meses, sin embargo, la respuesta gubernamental fue la represión y la criminalización de los manifestantes (siempre, claro, con la velada estrategia de establecer diferencias al interior de los rapa nui), por lo que el pueblo deberá avanzar hacia mayores niveles de consolidación de sus organizaciones y de sus lazos con otros movimientos y colectivos para continuar su lucha<sup>67</sup>.

### **Movimientos socio-ambientales**

Fueron numerosas las protestas contra los varios proyectos contaminantes que están en proceso de instalación en Chile, a lo largo de todo su territorio, en lugares vírgenes que constituyen reservas importantes, santuarios y hábitats de especies en peligro de extinción. Damos cuenta aquí de los que concitaron mayor oposición en este año<sup>68</sup>.

#### *La central Barracones en Punta de Choros*

Emblemático en las luchas de carácter medioambiental fue el conflicto desatado a raíz del proyecto de la multinacional franco-belga Suez Energy de construir una central termoeléctrica a carbón (Barracones), en la caleta de Chungungo, al sur de Punta de Choros (en donde está la primera reserva marina del país y donde vive actualmente el 85% de los pingüinos de Humboldt que existen en el mundo). El presidente Piñera se había manifestado en contra del proyecto durante su campaña electoral: “Lo que estamos haciendo es una locura. [...] Voy a promover las energías limpias y renovables porque ahí está el futuro de la energía en Chile y voy a ser muy riguroso y exigente con proyectos termoeléctricos contaminantes como ha habido ya más de la cuenta en nuestro país”<sup>69</sup>. Sin embargo, a finales de agosto, la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) aprobó el proyecto termoeléctrico, una vez comprobado que cumplía con todas las exigencias legales<sup>70</sup>. La reacción por parte de las organizaciones ecologistas no se hizo esperar: convocaron a movilizaciones a lo largo del país a través de las redes sociales: “Fue tal el nivel de interés, que el término ‘termoeléctrica’ fue por algunos minutos uno de los tópicos más comentados en Twitter a nivel mundial”<sup>71</sup>. A ellas se sumaron personas sensibilizadas con la protección del medio ambiente y una gran cantidad de artistas, quienes ya habían participado en la campaña “Salvemos Punta de Choros”, puesta en marcha meses atrás<sup>72</sup>. La movilización social fue rápida y masiva. La aprobación del proyecto recibió críticas incluso de los diputados de la propia

coalición gobernante. Toda la presión recayó entonces sobre el presidente, al que se le exigía cumplir con su promesa de campaña; éste se vio “forzado” a asumir una participación directa en el caso y a negociar personalmente con la empresa la instalación de la termoeléctrica impidiendo así que la central Barracones se construyera en Punta de Choros<sup>73</sup>. Las organizaciones ambientalistas siguen luchando para impedir otros proyectos termoeléctricos que existen, y que se están proponiendo, en el país, incluso en la misma zona en la que se proyectaba la construcción de esta central; y sobre los que Piñera todavía no ha dicho nada. De hecho, a los pocos días de la decisión sobre la termoeléctrica de Punta de Choros advirtió que no volvería a intervenir personalmente pues esa forma de actuar había sido particular y única, al tratarse de una “situación excepcional”, ante los cuestionamientos por parte de algunos sectores políticos de haberse saltado la institucionalidad vigente<sup>74</sup>.

#### *La termoeléctrica Castilla*

Otro de los megaproyectos conflictivos es la central termoeléctrica Castilla –propiedad de Eike Batista, empresario brasileño considerado por la revista *Forbes* el segundo hombre más rico de América Latina–, en la Región de Atacama, en el norte del país, que de llegar a construirse, se convertiría en la termoeléctrica a carbón más grande de Latinoamérica. El proceso de votación del proyecto estuvo plagado de irregularidades: la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud modificó la calificación del proyecto de “contaminante” a “molesto”, abriendo de esa manera el camino para su aprobación por parte de la Corema de la región; sin embargo, a finales de julio la Corte de Apelaciones de Copiapó “decretó la orden de no innovar con respecto a la tramitación del estudio de impacto ambiental”, es decir, acogió el recurso presentado contra la recalificación del Seremi<sup>75</sup>. A principios de septiembre, la Plataforma de Oposición Ciudadana a Termoeléctrica Castilla convocó a numerosas marchas y movilizaciones en distintas ciudades del país. Los ambientalistas denuncian que el proyecto podría acabar con el espectacular fenómeno del desierto florido<sup>76</sup>, además de afectar a numerosas playas vírgenes y modificar el hábitat de diversas especies en peligro de extinción. De momento se encuentra detenido pero ya ha sido aprobada la construcción del puerto vinculado a dicho proyecto<sup>77</sup>.

#### *La huelga de Caimanes*

Otra huelga de hambre relevante fue la que mantuvieron once pobladores de Los Caimanes –en la Región de Coquimbo– contra la minera Los Pelambres, propiedad del grupo Luksic<sup>78</sup>, por la construcción de un tranque<sup>79</sup> de relave de residuos tóxicos (El Mauro), el más grande de Latinoamérica y que amenaza la propia existencia del pueblo. La decisión fue tomada tras cinco años de conflicto con la empresa minera, cuando el tranque amenazaba con desbordarse; los huelguistas (y la comunidad) exigieron al gobierno que intercediera ante la empresa para cerrar el tranque<sup>80</sup>. La huelga comenzó el 27 de septiembre y durante los primeros días ni los medios de información oficialistas (sólo algunos medios críticos que tratan de hacer contrapeso al duopolio –*El Mercurio* y *La Tercera*– se hicieron eco de la noticia), ni el gobierno, ni la empresa dieron mayor relevancia a la protesta de los pobladores. Cuando se cumplían casi tres semanas, representantes de la empresa

visitaron la comunidad para decir que no había solución posible, pues aun en el caso de que se dejase inactivo el tranque, persistía el riesgo de que la comunidad quedara sepultada por un aluvión de deslaves<sup>81</sup>. No fue posible el diálogo y los comuneros continuaron con la protesta, debiendo además desmentir las informaciones que la empresa había difundido según las cuales sólo existía “un afán de lucro” en los huelguistas<sup>82</sup>.

Sólo la tenacidad de los activistas, aun a riesgo de comprometer su vida, logró que transcurridos dos meses del inicio de la huelga, algunos políticos de la oposición, entre ellos la presidenta de la Cámara de Diputados, alzarán la voz solicitando la intervención de la Iglesia católica para promover una mesa de diálogo<sup>83</sup>, ante la perfidia de la empresa y la desidia del Ejecutivo, quien insistía en que el conflicto era entre privados y que debía ser resuelto por la Justicia<sup>84</sup>. La Iglesia acogió el llamado de la diputada y dos semanas más tarde, el 7 de diciembre, nombró a monseñor Jorge Patricio Vega como facilitador del diálogo entre las partes, quien pronto inició un diálogo con la comunidad de Caimanes. No obstante, la instalación de la mesa y su conformación (sobre todo, en cuanto a la posibilidad de que participara también el gobierno) estuvo rodeada de mucha incertidumbre. Por otra parte, la empresa exigió para retomar el diálogo algunas condiciones, entre ellas que no participara el entonces vocero de los huelguistas, Cristián Flores. Pese a la inicial renuencia de los huelguistas, finalmente Flores se auto-marginó de las negociaciones para posibilitar el diálogo y en señal de buena voluntad de los comuneros. La mesa se instaló el día 16 de diciembre<sup>85</sup>, en medio de una situación desesperada por parte de los huelguistas tras 80 días de ayuno, y al día siguiente las 8 personas que permanecían en huelga de hambre<sup>86</sup> depusieron esta acción por problemas graves de salud y sin ningún resultado positivo en cuanto a las negociaciones establecidas con la empresa<sup>87</sup>. El vocero de los huelguistas lo explicó así: “La mesa se quebró, dado que ayer hubo una instancia de diálogo con minera Los Pelambres donde la oferta que le hizo al pueblo fue una burla. No trataron nada de fondo, que es lo que estábamos solicitando, el cierre y la erradicación del tranque, debido a que no tienen ningún interés por conversar o llegar a un acuerdo con la comunidad. Hemos decidido que tenemos que dar una nueva forma de lucha, y para eso necesitamos estar todos vivos”<sup>88</sup>.

Lamentablemente, la persistente e intensa lucha de los pobladores de Caimanes no logró concitar el mismo grado de apoyo que el de sus hermanos mapuche. Las raíces de fondo del conflicto no son muy distintas en ambos casos: el expolio y la explotación de los recursos naturales sin importar los derechos de las comunidades que habiten allí. En el Chile del neoliberalismo salvaje los intereses de las empresas están por encima de la sustentabilidad de la naturaleza y de los seres humanos. Por ello, quienes se oponen a los megaproyectos de la minería, de las forestales, etc. tienen por delante una lucha ardua y será necesario concientizar a toda la sociedad, no sólo a las comunidades directamente afectadas, de los riesgos que un modelo de este tipo implica para la propia sobrevivencia de las generaciones futuras.

### *La hidroeléctrica HidroAysén*

El caso de HidroAysén no es muy distinto al anterior. HidroAysén es un proyecto hidroeléctrico que las empresas Endesa y Colbún planean construir en la Región de Aysén, en la Patagonia chilena, para represar los ríos Baker y Pascua. A princi-

pios de mayo, el consorcio empresarial presentó los informes de impacto ambiental, mismos que fueron cuestionados por otro estudio, poniendo al descubierto los graves problemas medioambientales que acarrearía para la región<sup>89</sup>. La iniciativa se presentó hace varios años, y llevaba dos en trámites para su aprobación; desde el primer momento las organizaciones ambientalistas –quienes encabezan la campaña “Patagonia Sin Represas”– se opusieron con todas sus fuerzas al proyecto. Pero nada más llegar Piñera al gobierno, ENEL, la empresa italiana propietaria de Endesa España, pidió al Ejecutivo acelerar los trámites para la definitiva aprobación de HidroAysén, afirmando que esperaban iniciar las obras en 2012<sup>90</sup>. Pocos días antes, los activistas de “Patagonia sin Represas” habían realizado una gira por Europa para denunciar el daño que provocaría el megaproyecto e incluso habían asistido a la junta de ENEL para exponer sus planteamientos<sup>91</sup>. Los ecologistas lograron vincularse con grupos afines en Italia y lanzar allí una campaña contra el proyecto; dos meses más tarde representantes de organizaciones ecologistas y de medios de comunicación italianos llegaron a Chile para continuar ejerciendo presión, demostrando así un alto grado de vinculación internacional<sup>92</sup>. El consorcio empresarial todavía debe responder a diversos cuestionamientos planteados por organismos públicos para poder dar luz verde al proyecto; dichos cuestionamientos van en el sentido de modificar aspectos más o menos superficiales pero en ningún caso se observa un cuestionamiento de fondo por parte del gobierno, con lo que los activistas deberán redoblar esfuerzos en su campaña de denuncia para poder impedir la construcción de HidroAysén.

### *El ducto al mar de Celco*

Hubo otras movilizaciones y protestas por megaproyectos contaminantes desde el norte al sur de Chile. Uno de esos proyectos es el ducto al mar que la empresa Celulosa Arauco y Constitución (Celco) quiere construir para evacuar los líquidos residuales de la planta de Celulosa de Valdivia en la caleta de Mehuín –territorio mapuche lafkenche de tradicional pesca artesanal y turismo sustentable–, en la Región de Los Ríos. La lucha contra el “terrorismo socio-ambiental” de esta empresa se remonta a 1996: por más de diez años los pescadores lafkenches impidieron que la empresa realizara los estudios de impacto ambiental<sup>93</sup>. Sin embargo, el 23 de febrero, en las últimas semanas del gobierno de Bachelet, el proyecto fue aprobado por la Corema de la Región. Las comunidades mapuche-lafkenche interpusieron un recurso de protección, apelando al artículo 169 de la OIT, que les garantiza el derecho de consulta, pero éste fue rechazado el 14 de octubre<sup>94</sup>. Una vez más se demostró que los intereses del gran capital están por encima del equilibrio de los ecosistemas, y las comunidades deberán seguir luchando para resguardar los derechos, en este caso, del mar.

Fruto del triunfo de Punta de Choros y de las luchas medioambientales que se sostienen a propósito de otros proyectos contaminantes, tuvo lugar en septiembre el primer Encuentro Nacional de Movimientos Sociales contra las Termoeléctricas, en el que se decidió la creación de la organización Chile Sin Termoeléctricas, con el fin de aunar esfuerzos, como “una instancia de articulación, información, canalización y mapeo de los conflictos ambientales y de los actores involucrados”<sup>95</sup> lo cual implica un avance significativo en las luchas de carácter socio-ambiental.

### **Conflictos Laborales: un año de paros, huelgas y manifestaciones.**

Otros muchos fueron los conflictos que se sucedieron en este 2010. En el terreno de los conflictos laborales se observó un incremento notable en las huelgas y paros. Parecía que las huelgas se contagiaban, retroalimentaban y reproducían.

#### *Mineros en huelga: Collahuasi*

En mayo, unos cuatro mil trabajadores subcontratados de la minera privada Doña Inés de Collahuasi –perteneciente a las firmas anglo-suíza Xstrata y sudafricana Anglo American– iniciaron movilizaciones al tomar los caminos de acceso a las instalaciones de la minera, exigiendo un mejor trato –mejoras en las condiciones del campamento donde se alojan– por parte de la empresa y el pago íntegro de un bono prometido<sup>96</sup>; sin embargo, en la madrugada fueron sorpresiva y violentamente desalojados por Carabineros y 17 de ellos detenidos<sup>97</sup>. Los trabajadores anunciaron entonces una huelga indefinida<sup>98</sup>. A los tres días del inicio de las movilizaciones, tras una reunión de 24 horas casi ininterrumpidas, los trabajadores y la empresa llegaron a un principio de acuerdo, mismo que fue suspendido horas después por la minera. En el interior se produjeron diferencias entre los trabajadores subcontratados y los empleados de planta de la empresa. Entonces, el gobierno decretó el ingreso de Carabineros a la minera poniendo fin, por la fuerza, a la movilización de cuatro días que dejó una pérdida para la empresa de unos 9 millones de dólares diarios<sup>99</sup>. La empresa retomó las actividades de forma restringida hasta normalizar la situación, mientras en una actitud revanchista presionó a las empresas contratistas para que despidieran a los trabajadores que habían participado en el paro, situación que se concretó en 80 casos.

A inicios de noviembre la discusión se reeditó cuando los trabajadores tuvieron que discutir el nuevo contrato colectivo, ante el vencimiento del vigente. La empresa y el sindicato, que agrupa a más de 1.500 trabajadores, iniciaron las conversaciones con la mediación del gobierno; sin embargo, no fueron capaces de llegar a un acuerdo a pesar de sucesivas reuniones. Así, el viernes 5 de noviembre comenzó la huelga en el tercer mayor yacimiento de cobre del mundo; la empresa puso en marcha un plan de emergencia con personal de reemplazo para mantener la producción de cobre en niveles normales. A las dos semanas de iniciada la huelga algunos trabajadores abandonaron el paro y aceptaron la oferta de la empresa. Sin embargo, el paro se mantuvo y las negociaciones continuaron durante 33 días, hasta que alcanzaron un convenio satisfactorio para ambas partes, por el cual la empresa se comprometió a entregar un bono de 12 millones de pesos (unos 24 mil dólares), un préstamo blando de 2 millones (4 mil dólares aprox.), diversos beneficios en educación, vivienda y salud, y un reajuste del sueldo base del 3,25%<sup>100</sup>.

#### *El Transantiago trae cola*

Recurrentes fueron las movilizaciones en el caso del Transantiago (el nuevo sistema de transporte –buses colectivos– de Santiago que funciona desde 2007 y que es operado por distintas empresas privadas). En julio unos 650 chóferes se pusieron en huelga por adeudos en concepto de imposiciones, cotizaciones de salud y sueldos impagos. A ellos se sumaron, días más tarde, otros 360 conductores de otra

línea del Transantiago<sup>101</sup>, exigiendo un reajuste salarial y mejoras en las máquinas<sup>102</sup>. Mientras los trabajadores estaban en huelga, el gobierno decidió traspasar los servicios que ofrecía la empresa en conflicto, a otra empresa, rompiendo de esa manera la huelga legal que sostenían los conductores, al dejarlos sin interlocutor<sup>103</sup>. En ese momento, el Ejecutivo descartó la ayuda económica a la empresa; sin embargo, en octubre el Senado aprobó un proyecto de ley por el que otorgará 800 millones de dólares al Transantiago con el objetivo declarado de moderar las alzas tarifarias a favor de los usuarios, aunque es obvio que no todo el dinero irá destinado a ese fin y que constituye principalmente un *salvataje* de la empresa.

**“En el terreno de los conflictos laborales se observó un incremento notable en las huelgas y paros. Parecía que las huelgas se contagiaban, retroalimentaban y reproducían”**

#### *Trabajadores de Correos de Chile*

Por su parte, el 6 de agosto, los trabajadores de Correos iniciaron una huelga legal en el marco del proceso de negociación colectiva que sostenían con los directivos desde el 17 de junio. En un proceso de unión histórico, 5 mil de los 5.700 trabajadores, agrupados en cuatro de los cinco sindicatos existentes, votaron la huelga. Reclamaban el aumento de los sueldos, ya que hacía 14 años que no se habían reajustado<sup>104</sup>. Tres días más tarde finalizaron la huelga al obtener un bono por término de conflicto y un sistema variable de incrementos: 11,6% por sobre del IPC en las rentas más baja y progresivamente menor en los siguientes estratos<sup>105</sup>. La alianza de la inmensa mayoría de los trabajadores y su firmeza fue lo que permitió obtener tan rápidamente una solución al conflicto. No deja de sorprender, en todo caso, que durante los gobiernos concertacionistas la acción colectiva en este sector estuviera aletargada, al punto de no exigir tenazmente un aumento salarial durante tanto tiempo, lo que los mantenía en una situación de fuerte endeudamiento.

#### *El paro de los empleados públicos*

Los empleados públicos, a través de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), expresaron su descontento con la gestión del gobierno, en particular en relación con los despidos arbitrarios de funcionarios públicos que hasta el mes de julio ascendían a más de 2.500. Por lo tanto, solicitaban al gobierno detener los despidos improcedentes y reincorporar a los trabajadores despedidos. El 18 de julio la ANEF entregó un petitorio al gobierno exigiendo el término de los despidos, el reintegro de los funcionarios desvinculados y una mayor estabilidad laboral. De no ver cumplidas sus reivindicaciones, el gremio iniciaría movilizaciones<sup>106</sup>. Esas acciones se concretaron a inicios de agosto, cuando la ANEF realizó una movilización nacional en protesta por los continuos despidos en el sector público y para denunciar que el presidente Piñera no había cumplido con la promesa de no despedir a funcionarios<sup>107</sup>, y convocaron a un paro nacional de 24 horas para el 26 de ese mes, mismo al que se sumaron los estudiantes secundarios y universitarios,

la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Colegio de Profesores y otras organizaciones sociales y gremiales<sup>108</sup>. El 8 de septiembre nuevamente se inició un paro nacional por 48 horas<sup>109</sup>. Al malestar provocado por los despedidos injustificados se sumaron las discrepancias por el reajuste salarial: mientras los empleados exigían un 8,9%, el gobierno les había ofrecido un 3,7%<sup>110</sup>. La ANEF convocó entonces a sus afiliados a realizar un paro para el 24 de noviembre, que se convertiría en el primer gran paro del gobierno de Piñera; sin embargo, los datos ofrecidos por los organizadores y por el gobierno variaban diametralmente: mientras los primeros aseguraron haber movilizizado al 95% de los 400 mil funcionarios públicos del país, el Ministro del Interior sostuvo que con suerte fueron 10 u 11%. No obstante, en Santiago se realizó una masiva concentración que convocó a 20 mil personas, según información de Carabineros<sup>111</sup>. Menos de una semana después, la ANEF volvió a convocar a un paro de 48 horas en rechazo al reajuste salarial de 3,7%, propuesta enviada por el gobierno al Parlamento<sup>112</sup>. La cerrazón del gobierno y su negativa a negociar el reajuste salarial —a pesar de la decena de reuniones que sostuvieron los representantes de Hacienda y Trabajo con los 14 gremios del sector público— hizo que las movilizaciones continuaran y que los funcionarios buscaran el apoyo de los parlamentarios de la Concertación, pues el alza salarial tendría que ser definida en el Congreso<sup>113</sup>. Hubo movilizaciones masivas y tomas los días 7, 13<sup>114</sup> y 15 de diciembre. Ese último día se votaba la propuesta de reajuste de 4,2% (propuesta final del gobierno). Por increíble que parezca, ésta fue finalmente aprobada por un voto cuando el presidente del PS, Osvaldo Andrade, se abstuvo de votar, impidiendo así que la propuesta pasara a una comisión mixta en donde los trabajadores podrían haber obtenido mayores beneficios. El político socialista recibió duras críticas de los parlamentarios de su propia coalición, por no respetar los compromisos contraídos, así como de los dirigentes sindicales pero se excusó diciendo que “lo hice *porque me lo pidieron los trabajadores* y sus dirigentes. Y lo que me pidieron era que viabilizara que existiera reajuste y aguinaldo. Les expresé que yo no podía votar favorablemente, porque el reajuste me parecía que no correspondía y lo había estado diciendo permanentemente. Y la única forma, en consecuencia, de cumplir con esa petición era no votando”<sup>115</sup>. Así, una vez más, se consumó la traición a los intereses de los trabajadores por parte de los políticos concertacionistas<sup>116</sup>. Los empleados públicos expresaron su voluntad de seguir en huelga a pesar de la aprobación del reajuste salarial<sup>117</sup>, pero la proximidad de las fiestas navideñas y el desgaste de los últimos meses, pusieron fin, de momento, a esta movilización. Como represalia por su protesta, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter decidió no pagar a los empleados públicos los días que se habían mantenido en paro<sup>118</sup>.

#### *Coletazos del terremoto: cesantes en la región*

A mediados de noviembre, un grupo de 33 mujeres se internó en la mina Chiflón del Diablo<sup>119</sup>, en la comuna de Lota, para protestar por el término de los empleos de emergencia del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), programa implementado en las zonas afectadas por el terremoto que concluyó a principios de noviembre en las regiones del Maule y Biobío dejando ocho mil cesantes (y en total serían doce mil puestos de trabajo; de los cuales sólo tres mil podrían ser re-ofertados a través de los municipios), la mayoría de ellos mujeres (62%). La acción de protesta contó

con el apoyo de algunos alcaldes de la zona. Al día siguiente de su encierro decidieron iniciar una huelga de hambre. Un sacerdote, en representación de monseñor Ezzati, visitó a las mujeres<sup>120</sup>, mientras afuera de la mina se congregaron familiares y manifestantes en apoyo a las huelguistas, quienes instalaron un improvisado campamento. El gobierno regional respondió enviando a Carabineros a la zona y ello generó momentos de tensión, provocando la incorporación de otras seis personas a la toma y huelga de hambre. En las intermediaciones del lugar se encontraban también algunos diputados de la oposición; todos ellos fueron desalojados y a los diputados de la Concertación se les impidió el paso a la mina, cuestión que suscitó el enojo de éstos e incluso la denuncia de violencia excesiva y agresiones por parte de Carabineros<sup>121</sup>. Luego de seis días las mujeres depusieron la huelga de hambre tras alcanzar un acuerdo en una mesa de diálogo con representantes gubernamentales y miembros de la Iglesia; la Intendenta de la Región del Biobío se comprometió a revisar los empleos y reabsorber a los cesantes de la Región, en los programas municipales, dado que el programa del CMT no puede continuar.

#### *Paro en el puerto: trabajadores de San Antonio*

A finales del mes de noviembre, los trabajadores portuarios de San Antonio –el primer puerto del país– iniciaron un paro por desacuerdos con los planes de licitación del terminal Costanera Espigón y de mitigación (compensaciones económicas: indemnizaciones y eventuales prestaciones a futuro –pensiones), ya que se supone que la privatización implicará la pérdida de puestos de trabajo para los que se desempeñan en ese lugar<sup>122</sup>. Parlamentarios de la oposición acusaron al gobierno de “llegar tarde a solucionar los problemas”, pues durante los primeros 12 días de la huelga no había tenido lugar ninguna gestión por parte del Ejecutivo, a pesar de las millonarias pérdidas (de cerca de millón y medio por día) que el paro de los portuarios estaba generando<sup>123</sup>. La huelga se prolongó durante todo el mes de diciembre, sin que las negociaciones con la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA) arrojaran algún resultado positivo, y ante la ausencia de acuerdo, unos 800 trabajadores, encabezados por el Frente de Trabajadores Portuarios de San Antonio, amenazaron con radicalizar las protestas e iniciar una huelga de hambre<sup>124</sup>. El paro generó fuertes pérdidas en el sector exportador, por tener lugar a inicios de la temporada de recolección de fruta; el auge de productos perecederos previsto para los siguientes días no hacía sino presionar por la solución del conflicto. A pesar de la difícil situación por la que atravesaban los trabajadores, después de tantos días de paro (pues la mayoría cobra por turno trabajado), se mantuvieron firmes en su decisión de llegar hasta el final: “Muchos trasladaron nuestro conflicto sólo al tema dinero, pero nuestro conflicto es más que la plata, es por dignidad”, afirmó el vocero del Frente<sup>125</sup>. El principal punto de desencuentro hasta ese momento eran las pensiones que los trabajadores exigían para aquéllos que tuvieran más de 45 años y que llevaran más de 15 en la empresa, y que pedían fueran al menos de dos sueldos mínimos por mes. El 5 de enero las partes implicadas tuvieron una nueva reunión, pero no fue hasta el día 7 cuando lograron un acuerdo que les aseguró una compensación de entre 5 y 15 millones, dependiendo de la antigüedad laboral, y la instalación de una mesa de trabajo para analizar la demanda de jubilaciones<sup>126</sup>.

## Conflictos educacionales

Los estudiantes secundarios y universitarios tuvieron gran protagonismo en este 2010; con marchas todos los meses hicieron sentir su voz en contra de la privatización de la educación y a favor de una educación equitativa y de calidad. Además expresaron su solidaridad con otras luchas y confluyeron con diversos movimientos, superando limitaciones de carácter corporativista.

### *El regreso de los Pingüinos*

Los estudiantes secundarios, agrupados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y en la Asamblea de Estudiantes Secundarios (AES) participaron en diversas movilizaciones a lo largo del año, para pelear por algunas de las reivindicaciones que la revuelta de “Los Pingüinos” del año 2006 dejó planteadas: el financiamiento de la educación pública, la des-municipalización y una educación de calidad<sup>127</sup>. Por otra parte, las alzas reiteradas en el transporte concitaron las protestas de los ciudadanos, por tercera vez en el año, y muy especialmente de los estudiantes, principalmente secundarios, ya que su pase estudiantil también fue objeto de las alzas de las tarifas<sup>128</sup>. A finales de abril realizaron una marcha junto con los estudiantes universitarios –agrupados en la Confederación de Estudiantes de Chile– para reclamar por el alza de 10 pesos del pasaje escolar, que ya alcanzaba los 140 pesos (un cuarto de dólar aproximadamente). Carabineros intervino cuando los manifestantes intentaban llegar hasta el edificio del Ministerio de Educación y más de una veintena de estudiantes resultaron detenidos<sup>129</sup>.

Los estudiantes también realizaron marchas en solidaridad con otras protestas, como la de los presos políticos mapuche y la de los empleados fiscales. A mediados de junio, una nueva subida de la tarifa escolar del Transantiago (a 160 pesos –un tercio de dólar) provocó otra protesta; los estudiantes tomaron<sup>130</sup>, durante unas horas, la sede de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Alumnos del Liceo Confederación Suiza ocuparon las dependencias del colegio, pero al día siguiente Carabineros irrumpió en el lugar y detuvo a 35 estudiantes.

Los estudiantes secundarios volvieron a manifestarse el 26 de julio y confluyeron con los funcionarios públicos, quienes sostenían en ese momento un paro en protesta por los despidos improcedentes<sup>131</sup>. El 11 de agosto se concentraron con el propósito de entregar una carta en la que daban a conocer sus reivindicaciones respecto a la calidad educativa y al pasaje escolar<sup>132</sup>. Nuevamente, a mediados de agosto convocaron a una marcha, que no contaba con el permiso de la intendencia Metropolitana, fue reprimida con carros hidrantes y gases lacrimógenos y se saldó con más de 60 detenidos<sup>133</sup>. El 10 de noviembre protagonizaron una nueva marcha en la que se unieron a los estudiantes que desde el 30 de septiembre estaban viajando hacia la capital desde Puerto Montt en protesta por la “agenda privatizadora” de Piñera, pues consideran que éste busca reducir los recursos para las universidades públicas al obligarlas a compartirlas con las privadas, desconociendo el carácter y la función de cada una de ellas en la sociedad<sup>134</sup>.

### *Los universitarios en defensa de la educación pública*

Las reformas proyectadas por el Ejecutivo para el Sistema de Educación Superior que consisten en homologar el sistema crediticio (que actualmente se divide en el

Fondo Solidario –para universidades tradicionales, nacidas antes de la reforma de 1980– y el Crédito con Aval del Estado –para el resto de universidades), de manera que todas las universidades compitan por los recursos estatales (es decir, que la mayor parte del financiamiento sea a través de fondos “concurables”)<sup>135</sup> recibió fuertes críticas e impulsó movilizaciones en contra por parte de la comunidad universitaria –rectores, profesores y estudiantes<sup>136</sup>.

En abril, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) entregó un petitorio formal al Ministro de Educación, dando a conocer sus reivindicaciones en materia de educación pública. Como no obtuvieron ninguna respuesta, en mayo realizaron una marcha que convocó al menos a seis mil estudiantes en Santiago y mil en Concepción –según estimaciones de Carabineros– para exigirle al gobierno mayores ayudas –en número y en cuantía– para los estudiantes afectados por el terremoto. A la manifestación se sumaron los estudiantes secundarios, nuevamente para protestar por el alza de la tarifa escolar en el Transantiago. La protesta fue respaldada por varios rectores de universidades tradicionales. La policía, como de costumbre, intervino para dispersar a los manifestantes y dejó un saldo de 31 detenidos. El gobierno, por su parte, con una actitud paternalista y moralista, recriminó a los estudiantes por “querer perder días de clase”<sup>137</sup>. Los estudiantes, universitarios y secundarios, volvieron a marchar el 2 de junio, para expresar su malestar por la ausencia de soluciones concretas en el mensaje presidencial del 21 de mayo anterior. Esta vez se congregaron unos 4 mil manifestantes; estuvieron apoyados por los funcionarios del Ministerio de Educación, quienes realizaban un paro de 48 horas en protesta por los despidos en el sector<sup>138</sup>.

### Conflictos políticos: “El caso bombas”

Otro conflicto, de carácter político, aunque las autoridades gubernamentales y judiciales pretenden reducirlo a un tema exclusivamente delictual, fue el suscitado a raíz de la detención de un grupo de anarquistas y *okupas*, acusados de ser los autores de las más de 100 explosiones que han tenido lugar en Santiago, Valparaíso y Temuco desde el año 2005. Todas las bombas causaron sólo daños materiales –en los vidrios y estructuras superficiales– de los lugares en los que fueron emplazadas, por ser de poca capacidad destructiva y haber sido activadas en edificios y en horarios con poca afluencia de gente.

A finales de enero se dio a conocer que se habían encontrado restos de pólvora negra (similar a la hallada en los artefactos explosivos) en la ropa de algunos *okupas*, requisada después de varios allanamientos en casas *okupa* de Santiago, lo cual constituía evidencia clave para detener a los sospechosos<sup>139</sup>. La policía barajaba la hipótesis de que se trataba de grupos de anarquistas de Santiago y Valparaíso, fundamentalmente. *El Mercurio* se hizo eco de la hipótesis –a la que daba por confirmada– y contribuyó a crear un clima de hostilidad hacia el movimiento *okupa* y anarquista: “[...] Cómo es posible que unos pocos individuos pertenecientes a grupos anarquistas, quizás pobremente financiados y con métodos y tácticas artesanales en comparación con las fuerzas policiales, sean capaces de realizar estos atentados impunemente, una y otra vez”<sup>140</sup>. A principios de julio comenzaron las detenciones; concretamente la de un joven acusado de fabricar los artefactos explosivos<sup>141</sup>. A mediados de agosto se produjeron dos detenciones en Valparaíso y otras

doce en los allanamientos a tres casas *okupa* en Santiago<sup>142</sup>. Se les acusó de estar relacionados con el “caso bombas”, como fueron llamadas las pesquisas en torno a las explosiones, fueron recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS)<sup>143</sup>. Finalmente, 8 de ellos fueron formalizados por “asociación ilícita terrorista y de colocación de artefactos explosivos con la finalidad de producir temor en la población” y los otros seis quedaron en libertad pero imputados por otros delitos y, por lo tanto, sujetos a medidas cautelares<sup>144</sup>. Para la prensa oficialista, ser *okupa* o anarquista lo convierte a uno *ipso facto* en un delincuente o un terrorista: “Se trata de individuos considerados ayudistas e incluso *financistas de casas okupa* y, *posiblemente*, también de atentados explosivos”. La policía afirmaba que en los documentos incautados en las casas *okupa* había “instrucciones para la realización de una acción violentista” y “fórmulas para elaborar y utilizar diferentes tipos de bombas”<sup>145</sup>. Además, la policía habría encontrado trazas de pólvora negra y TNT en las ropas de algunos de los detenidos y 17 vídeos con adjudicaciones de atentados perpetrados en Santiago; documentos que supuestamente demostrarían que el grupo anarquista recibía financiamiento desde el extranjero, y panfletos reivindicatorios de los ataques<sup>146</sup>.

En medio del conflicto chileno-mapuche no faltaron los intentos de vincular a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una de las principales organizaciones del pueblo mapuche, con los detenidos, en un intento de desprestigiar a ambos colectivos. El abogado de dos detenidos acusados de poner bombas denunció que se estaba produciendo “un ajusticiamiento anticipado” por parte de la prensa y del Ejecutivo<sup>147</sup>. A pesar de que la propia policía reconocía que los grupos anarquistas no tenían jerarquías ni liderazgos, hablaron de “liderazgo informal” e imputaron a dos de ellos como líderes del grupo. Como en el caso de los presos mapuche, la aplicación de la Ley Antiterrorista permitió el empleo de una batería de medidas excesivas y arbitrarias, como la de los testigos protegidos, con base en las cuales se fueron ampliando las indagatorias de la policía hasta afirmar tener una lista de más de 80 sospechosos de estar vinculados con el denominado “caso bombas”<sup>148</sup>. Se intensificó la campaña de desprestigio del movimiento *okupa*: según el fiscal encargado de la investigación “el carácter cultural del lugar [en referencia a una de las casas *okupas* allanadas y clausuradas] no es más que una ‘fachada’. Detrás de los colectivos existe una organización que se reúne para *planificar, fabricar, ejecutar, adjudicar y publicitar delitos terroristas*”<sup>149</sup>. Las investigaciones continuaron, plagadas de irregularidades; transcurridas dos semanas del allanamiento, de la detención de los imputados y de la clausura de la casa *okupa*, la policía encontró *nuevamente* pruebas en la casa: “una mochila con trazas de TNT que estaba *escondida* en un rincón de la casa”<sup>150</sup>. A dos de las personas que habían quedado libres, con medidas cautelares, se les revocó la libertad. Durante los meses siguientes hubo pocas noticias con respecto a este caso. Los presos siguen en la CAS, en prisión preventiva. A finales de año se reanudaron los bombazos: el 20 de diciembre estallaron dos explosivos en la capital; el 23 una carta-bomba, supuestamente enviada por un grupo anarquista italiano, estalló en la embajada de Chile en Roma, hecho que fue celebrado por algunos grupos anarquistas de Santiago<sup>151</sup>. El movimiento *okupa* realizó diversas actividades de protesta por la detención de sus compañeros, que consideran un auténtico montaje: pasacalles, exhibición de documentales (“pantallazo”), marchas y concentraciones. También realizó varios actos de solidaridad con el movimiento mapuche.

### **Conflictos económico-sociales: los pobladores siguen en pie de lucha**

El movimiento de pobladores –gente sin casa, deudores habitacionales, *allegados*– no tuvo en este 2010 una visibilidad tan grande como en coyunturas anteriores. Tras una relación plagada de desencuentros con los gobiernos de la Concertación, la mayoría de los pobladores llamaron a votar nulo o a abstenerse en la segunda vuelta electoral<sup>152</sup> y mantuvieron una prudente espera durante los primeros meses de la administración *piñerista* para ver cuáles eran los pasos del gobierno en materia habitacional y, en particular, en cuanto a sus reivindicaciones largamente postergadas. No obstante, a medida que transcurría el año, al no encontrar una respuesta satisfactoria por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a su situación y ante los anuncios del gobierno sobre una nueva política habitacional (que dificultaría el acceso a la vivienda social al exigir un mayor porcentaje de ahorro), los pobladores fueron perdiendo las esperanzas de encontrar una pronta solución, lo cual hizo que retomaran, aunque moderadamente, las acciones colectivas de protesta.

Al finalizar el gobierno de Michelle Bachelet el déficit habitacional era de 543 mil unidades; sin embargo, con el terremoto esa cifra se incrementó en 371 mil viviendas, con lo que el total de viviendas faltantes, según datos del Minvu, superaría las 900 mil<sup>153</sup>. El terremoto y posterior tsunami vinieron a agravar la situación de muchas familias en las zonas afectadas; y por ello fueron varias las protestas de los pobladores ante lo que calificaron como “inoperancia” de las autoridades gubernamentales en la distribución de ayuda y restablecimiento de los servicios básicos. Asimismo, en algunos casos los pobladores denunciaron la campaña de desprestigio y estigmatización dirigida por el gobierno y los medios, al calificarlos como “saqueadores”, por tratarse de familias pobres que, a una semana del terremoto, no habían recibido ningún tipo de ayuda<sup>154</sup>. Este tipo de protestas –tomas, concentraciones, etc.– continuaron durante los meses siguientes en numerosas localidades directamente afectadas por los fenómenos naturales, para denunciar la lenta llegada de la ayuda y las malas condiciones en que ésta era entregada (mediaguas sin ventanas y puertas; con las maderas mojadas, etcétera).

Distintas experiencias y reivindicaciones –ligadas a los problemas más directamente vinculados con el terremoto, pero también al déficit estructural de vivienda en Chile– llevaron a los pobladores, agrupados en distintas organizaciones (Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales, Andha Chile a Luchar Democrático; Movimiento de Pobladores en Lucha, MPL; Federación Nacional de Pobladores, FeNaPo; etc.) a confluir en una concentración frente a La Moneda a mediados de abril<sup>155</sup>. A principios de mayo, pobladores de Andha Chile a Luchar Democrático realizaron una movilización para conmemorar el año de la toma del puente Pío Nono y la ribera del río Mapocho. La dirigente de la organización señaló que le habían dado un plazo de 6 meses a Piñera para que cumpliera su palabra y “si no hay solución, que se prepare Piñera porque le vamos a dar igual que como le dimos a Bachelet”<sup>156</sup>.

El 1º de junio se produjo una toma de terrenos en Chiguayante, comuna de la provincia de Concepción; los pobladores protestaban por los años de tramitación, la burocracia excesiva y la inexistencia de una solución efectiva, frente a una situación marcada por las presiones cada vez más intensas para que abandonasen sus casas y los elevados precios de los alquileres. Pese a la amenaza de un desalojo inminente, los ocupantes consolidaron la toma y realizaron cortes de ruta para

visibilizar su situación y presionar a las autoridades; el alcalde hasta el momento sólo les había ofrecido un terreno apartado y con características de basural<sup>157</sup>. No hubo desalojo, la toma se depuso después de considerar que las postulaciones para una vivienda social deberían hacerse por su condición de damnificados del terremoto y no por la presión de estar ocupando unos terrenos<sup>158</sup>.

Las dirigentes de las principales organizaciones de deudores habitacionales fueron recibidas en La Moneda el 19 de agosto por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. El acto, que se esperaba que inaugurara una relación distinta a la sostenida con la anterior administración, fue visto por las pobladoras como un gesto simbólico, ya que durante el gobierno de Bachelet habían protagonizado numerosos enfrentamientos con la mandataria. Sin embargo, una semana más tarde los pobladores de Andha Chile a Luchar Democrático decidieron tomar el edificio del Ministerio de Hacienda, después de que se filtrara un documento en el que se aseguraba “que no se condonarían sus deudas, se van a esquivar los remates emblemáticos y se van a alargar los créditos hasta el 2040”<sup>159</sup>. Su objetivo era entrevistarse con el Ministro, pero fueron desalojados por Carabineros y 30 de ellos fueron detenidos.

Un mes más tarde, Andha Chile a Luchar anunció que no organizarían nuevas movilizaciones después de una reunión que sostuvieron con la ministra de Vivienda, quien prometió 125 mil millones de pesos para subsidiar y condonar créditos al quintil más pobre de la población<sup>160</sup>. Sin embargo, los pobladores de otras organizaciones (como Andha Chile a Luchar Democrático y de la FeNaPo<sup>161</sup>) anunciaron movilizaciones por las medidas del gobierno en materia habitacional y porque después de tres meses de trabajo, no veían transparencia en las posibles soluciones planteadas por el Ministerio. Consideraban que la nueva política habitacional contribuiría a engrosar el número de pobres y sin techo, al incrementar los montos de ahorro para postular a los subsidios, argumentando que los pobladores tienen capacidad de ahorro suficiente, algo que ellos niegan (cuestionando los mecanismos de medición de la situación de la familia, la Ficha de Protección Social). En señal de protesta protagonizaron, a mediados de noviembre, una toma de terrenos en un sector de La Pintana –comuna del sur de Santiago–, y una marcha hasta La Moneda para entregar una carta a la Presidencia de la República exigiendo la retirada de la nueva política<sup>162</sup>. La concentración frente al palacio gubernamental que congregó a más de mil pobladores se saldó con numerosos detenidos –más de 60– y agresiones en la comisaría a la que fueron llevados<sup>163</sup>. El 10 de diciembre la FeNaPo protagonizó una nueva movilización denunciando la política habitacional de Piñera<sup>164</sup>. Todo hace prever que las movilizaciones de los pobladores continuarán el próximo año.

## Conclusiones

Sin duda el 2010 fue un año atravesado por numerosos conflictos, marcado por tres acontecimientos –cambio de gobierno, terremoto y “accidente” minero– que contribuyeron a modificar sustancialmente las coordenadas de la acción colectiva de los últimos años. La huelga de hambre mapuche fue el hecho más relevante en términos de protesta y movilización social, pues logró romper el cerco mediático impuesto por el duopolio periodístico y las cadenas de televisión nacional a las acciones colectivas de los sectores populares e hizo llegar sus reivindicaciones a

amplias capas de la sociedad, instalando un intenso debate sobre la situación que denuncian –militarización de La Araucanía; criminalización de la lucha mapuche; aplicación de la Ley Antiterrorista, etc. Además, logró una repercusión internacional nada desdeñable, abriendo camino a lo que podría ser la configuración de un amplio movimiento de apoyo y de fiscalización de las acciones del gobierno chileno desde el exterior. Por todo ello, merece mención aparte en cualquier revisión de los acontecimientos de conflictividad social. Como ya hemos dejado constancia, hubo muchos otros conflictos de diverso signo y características, mismos que fueron incrementando su intensidad a medida que transcurrían los meses. Las huelgas y paros proliferaron en forma contagiosa en la segunda mitad del 2010.

Es posible identificar algunos rasgos distintivos de la forma que asumieron los conflictos sociales y del tipo de relación que se fraguó entre los actores sociales movilizados y las autoridades gubernamentales de turno. Algunos de ellos no son novedosos con respecto a períodos anteriores, pero otros sí.

La mayoría de conflictos que observamos este 2010 fueron heredados por la nueva administración. Todos ellos –laborales, educacionales, étnico-políticos, socio-ambientales, etc.– tienen larga data y responden a la incapacidad o falta de voluntad de los gobiernos de la Concertación para ofrecer soluciones estructurales e integrales a las reivindicaciones de los distintos sectores sociales populares. Podríamos decir que constituyen el déficit social y político de los veinte años anteriores que fueron legados al gobierno de Sebastián Piñera, y que éste contribuyó a agravar al menospreciar esas deudas y no tomar en consideración a los sectores más vulnerables del país, continuando con políticas privatizadoras y con medidas de militarización y control policiaco y judicial. La continuidad con una forma de gestionar los conflictos se observa no sólo en el Ejecutivo, sino también en los otros poderes del Estado –Judicial y Legislativo–; se trata efectivamente de una continuidad de las políticas de Estado. No en vano los años en los que la Concertación estuvo al frente de la administración, lo que se produjo fue un Cogobierno, en todos los asuntos importantes, entre la derecha y la centroderecha.

Los medios de desinformación –periódicos de tiraje nacional y cadenas de televisión– mantuvieron una feroz campaña de desprestigio de las protestas sociales y de las reivindicaciones erigidas por las distintas organizaciones y movimientos sociales. Las estrategias para ello fueron varias: silenciamiento de las protestas, falsificación de las informaciones, tergiversación de las declaraciones, ocultamiento de las reivindicaciones, valoración peyorativa de los actores e, incluso, declaraciones de culpabilidad de los mismos. Cabe destacar, sin embargo, la presencia más limitada de ciertos medios de información críticos que cubrieron los conflictos sociales y políticos, aportando una visión más completa y apegada a la realidad de los mismos, tratando de hacer contrapeso a la mirada profundamente viciada y tendenciosa de los primeros. Lamentablemente, algunos de esos medios, como el *Diario Uno*, no pudieron seguir funcionando.

A pesar de la continuidad de fondo –en las políticas y en el estilo de gobernar– que ya señalábamos, el hecho de que la derecha regresase a La Moneda tuvo un impacto simbólico nada despreciable en los grupos sociales que, en mayor o menor medida, se identifican con partidos de centro (o “izquierda”) y que, pese a las diferencias con la Concertación, consideran que hay una mayor afinidad de esa

coalición con los intereses de los trabajadores o del pueblo, según las orientaciones políticas. Por otra parte, los partidos de la coalición gobernante por veinte años –especialmente el Partido Socialista– interpretaron el triunfo de Piñera no como un desplazamiento del electorado hacia posiciones más derechistas o conservadoras, sino como un voto de castigo a la Concertación por haberse apartado de los ideales iniciales, por no haber cumplido con las promesas de una sociedad más democrática, más justa y más igualitaria. Así, fueron frecuentes las declaraciones en el sentido de que había que volver a estar del lado de los trabajadores, apoyar los en todas sus reivindicaciones, asumir un compromiso real con los movimientos sociales, etc. Ahora que eran oposición, los concertacionistas parece que volverían a apoyar las justas reivindicaciones de los pobres, excluidos y explotados. Sólo así se comprenden algunas acciones como el ayuno de los diputados de partidos de la Concertación en solidaridad con la huelga de hambre mapuche. Seguramente hubo un uso político, en mayor o menor medida, de las movilizaciones sociales por parte de estos parlamentarios; sin embargo, ello no impide que en ocasiones puedan convertirse en aliados de los movimientos sociales y contribuir a su lucha dándole visibilidad. No obstante, gestos de este tipo son todavía minoritarios, no involucran a las colectividades a las que pertenecen y tampoco modifican la impresión que los activistas tienen de lo que fue su gestión gubernamental.

En la línea de lo señalado anteriormente, podemos indicar que otra de las características de las movilizaciones sociales en este 2010 fue la casi inexistente vinculación de los partidos políticos con las protestas. El hartazgo y la desesperanza con respecto al papel de estas organizaciones políticas, que se manifestaron en las votaciones presidenciales, siguió presente a lo largo del año. Ningún partido político fue capaz de articularse fuertemente con alguna de las luchas sostenidas por los movimientos sociales; éstos actuaron al margen de las políticas partidistas, ignorando su existencia. El secundario papel jugado por los partidos políticos no es algo nuevo, pero fue más notorio ahora que los partidos de centroderecha –los de la Concertación– estaban en la oposición, pues aun así no hubo una compenetración con los problemas reales de los distintos colectivos. Similar caracterización aplica al PC, que mantuvo una presencia bastante débil en las movilizaciones sociales. Indiscutiblemente, su triunfo electoral en las recientes elecciones parlamentarias está ligado a los acuerdos con los partidos concertacionistas y en esa línea se mantuvo la dirección comunista, aun después de reconocer que aquéllos estaban atravesando por una crisis. Con declaraciones ambiguas, desleídas y poco convincentes expresó su solidaridad con algunos de los colectivos agraviados<sup>165</sup>; sin embargo, encaminó gran parte de sus esfuerzos a profundizar los acuerdos, entendimientos, alianzas, concesiones y toda clase de arreglos con los partidos de la Concertación, sobre todo, tratando de no ser ríspida con el sector más conservador de la Democracia Cristiana, que se opone rotundamente a cualquier clase de avenencia con los comunistas<sup>166</sup>. Este camino parece alejarlos más de la posibilidad de construir un proyecto de izquierda sólido que se presente como una alternativa creíble para los distintos grupos y sectores movilizados y que contribuya a fortalecer la oposición al neoliberalismo.

Esta indiferencia por parte de los partidos políticos “sistémicos” se relaciona con otro fenómeno que adquiere tintes dramáticos en la sociedad chilena actual,

fruto de los años de neoliberalismo salvaje: la fragmentación de la sociedad, la desarticulación de los distintos actores sociales y políticos críticos, la falta de organicidad del movimiento popular. El historiador Sergio Grez lo explicó magníficamente para el caso del conflicto chileno-mapuche: “[...] Resulta vergonzosa la *indiferencia* de gran parte de la opinión pública nacional, de muchas organizaciones sociales, de gente de izquierda y de intelectuales que normalmente aparecen asociados a la defensa de los Derechos Humanos”<sup>167</sup>. Pocas movilizaciones lograron trascender su ámbito más inmediato para vincularse con otras luchas. Significativas fueron las marchas conjuntas de estudiantes universitarios y secundarios con los trabajadores públicos. En algunos casos –la lucha mapuche; las luchas socio-ambientales–, en donde consiguieron vincularse con otros colectivos y concitar la solidaridad incluso internacional, las informaciones acerca de proyectos de coordinadoras o plataformas más amplias son esperanzadoras, pero constituyen procesos de articulación todavía frágiles y habrá que estar pendientes de su posterior evolución; como decía, es necesario romper con la inercia corporativista e individualista de los años pasados.

Con respecto a la forma de abordar los conflictos del nuevo gobierno y al tipo de relación establecida con los movimientos y organizaciones sociales sorprende que, pese a las promesas de mayor eficiencia de la nueva administración y a los deseos del presidente de ser omnipresente y gestionar todos los “imprevistos” personalmente, reiteradamente fue necesario recurrir a la mediación de la Iglesia católica para avanzar en la solución de los conflictos. Un rasgo importante es, pues, que las autoridades eclesiásticas se convirtieron en un facilitador del diálogo entre los manifestantes y las autoridades gubernamentales, asumiendo un papel preponderante que excede los atributos de esta institución en una “república democrática de carácter presidencialista”. Con ello se puso de manifiesto la torpeza, indolencia e incapacidad del gobierno para encontrar soluciones a los conflictos sociales y políticos ocurridos. Lo cual se evidenció también en el tratamiento policial (e incluso militar) de los mismos al apostar por un endurecimiento de las condiciones de represión y control social, que contribuyó a agudizar las situaciones de conflictividad social.

Todo ello redundaba en que los conflictos no fueran abordados de manera integral y atendiendo a sus condiciones estructurales de posibilidad. Por lo tanto, en ningún caso se asumieron las raíces de los problemas (que obviamente implicaría realizar modificaciones sustanciales del modelo económico y del sistema político) y, a lo sumo, se realizan concesiones parciales y superficiales, que contribuyen a contener las situaciones de mayor confrontación y explosividad, pero que no impiden que el malestar permanezca y vuelva a generar escenarios de conflicto en el futuro. Aun en aquellos casos en los que, ante la opinión pública nacional e internacional, quedó demostrado el mal proceder del gobierno –de manera deliberada o por negligencia–, como en la situación que padecen las comunidades mapuche o en la controversia por la instalación de megaproyectos altamente contaminantes y destructivos del medio ambiente, las autoridades gubernamentales insistieron en apostar por la difamación de los activistas mostrando así su inflexibilidad o, lo que es lo mismo, sus fuertes vínculos y compromisos con los grandes capitales nacionales e internacionales que les “impiden” emprender un viraje de ciertas políticas, aquéllas que precisamente signaron el Cogobierno de los años post-dictadura.

### Anexo: para entender el conflicto chileno-mapuche

El conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche es de larga data. En estricto sentido comenzó con la llegada de los españoles al continente y sus intentos por usurpar y ocupar el territorio en el que habitaban las distintas comunidades mapuche en buena parte de lo que hoy son Chile y Argentina. Sin embargo, tras arduas y sangrientas batallas, el ejército español fue derrotado y malgrado en tal medida que los conquistadores y la Corona española tuvieron que firmar las condiciones de la *rendición*: entre éstas estaba el establecimiento de una frontera natural (el río Biobío) al sur de la cual los españoles no podían adentrarse (salvo los misioneros que fungían las veces como “puente” entre ambas culturas y que procuraban la conquista por otros caminos: la evangelización)<sup>168</sup>. Si bien ello no evitó la codicia de los españoles, así como algunas incursiones menores de ambos bandos y algún levantamiento general, ambos pueblos establecieron un sistema de “parlamentos” (reuniones) con resoluciones vinculantes, así como un intercambio fluido de misivas al más alto nivel (entre los reyes y los representantes mapuche) propio de relaciones diplomáticas nada despreciables, con una gran dosis de diálogo.

El sistema antes descrito continuó, a grandes rasgos, con el nacimiento de la República (1818), y varios presidentes de Chile en las primeras décadas del siglo XIX, reconocieron la existencia de *otro pueblo* al sur del Biobío, su autonomía política y su jurisdicción sobre su territorio. No obstante, al pasar del tiempo inventaron todo tipo de triquiñuelas legales y ardides políticos para adueñarse del territorio mapuche (avance de fronteras, remate de territorios mapuche, presencia del ferrocarril, fundación de pueblos y villas) y finalmente la ocupación militar, de la mano de una feroz campaña de justificación de la dominación (ocupación) orquestada por el siempre fiel a los intereses capitalistas periódico *El Mercurio* de Valparaíso<sup>169</sup>. La campaña militar que se ha conocido como “Pacificación de la Araucanía” y que no fue más que el exterminio del pueblo mapuche, la destrucción de sus comunidades, la ocupación de su territorio, la usurpación de sus recursos y el confinamiento de los sobrevivientes en pequeños espacios conocidos como “reducciones”<sup>170</sup>, que en realidad eran campos de concentración y trabajo, comenzó en 1862 y finalizó en 1882. En ese lapso la población mapuche fue significativamente disminuida y sus territorios reducidos a aproximadamente el 5% (500 mil hectáreas) de lo que anteriormente poseían. El Estado chileno y varios poderosos particulares se hicieron con unos 10 millones de hectáreas que contribuyeron a crear la “moderna” propiedad latifundista en el sur de Chile.

Las agresiones al pueblo mapuche, la falta de reconocimiento de su identidad, la configuración de una imagen negativa de su “naturaleza” (como delincuente, bárbaro, ignorante, atrasado y flojo), sumado a las difíciles condiciones en que tuvieron que sobrevivir después del proceso de radicación y reducción, en terrenos poco productivos, sin las áreas destinadas a la recolección de frutos y leña, al pastoreo, al ramoneo, etc. (que fueron declaradas como “no efectivamente ocupadas” y usurpadas); en fin, la eliminación de las condiciones materiales de reproducción de su existencia y cultura continuaron con altibajos durante el siglo XX. En el breve intervalo del gobierno de izquierda de la Unidad Popular, se incentivó la reforma agraria que ya se había puesto en marcha durante el gobierno anterior, del

demócrata-cristiano Eduardo Frei Montalva. Sin embargo, el presidente Allende, y con él la clase política socialista y comunista (incluso la izquierda revolucionaria), no dejaron de ver en los mapuche a campesinos, interpretando su problemática en un sentido exclusivamente clasista y, por lo tanto, reduccionista. Tras la larga noche negra de la dictadura militar, muchos mapuche, como la mayoría de sectores sociales opositores, depositaron sus esperanzas de cambio y de justicia en la recién estrenada Concertación. No obstante, ésta los defraudó grandemente y quizás en mayor medida que a ningún otro colectivo. Durante los gobiernos de la Concertación se criminalizaron las reivindicaciones del pueblo mapuche, se persiguió a sus “luchadores” llegando incluso a asesinarlos (como en el caso de Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío) y encarcelándolos bajo la Ley Antiterrorista, una aberración heredada de la dictadura militar, que Pinochet utilizó para perseguir al movimiento democrático y revolucionario y que, más tarde, los gobiernos “socialistas” emplearon para reprimir al movimiento social y cultural mapuche<sup>171</sup>.

El movimiento mapuche venía experimentando un proceso de reorganización y reforzamiento de su identidad y proyecto político desde inicios de la década de los noventa, en torno a la conmemoración del quinto centenario de la Conquista y, más concretamente, desde finales de esa misma década, con el desbordamiento de la institucionalidad indigenista del Estado chileno. Ello derivó en la conformación de organizaciones políticas<sup>172</sup> y en la asunción de una estrategia de revalorización del territorio y de recuperación de las tierras ancestrales perdidas. No obstante, es incorrecto asumir un único proyecto o identidad en el interior del pueblo mapuche, consciente y organizado. No hay *una* identidad mapuche, y probablemente nunca la hubo. Más bien se trata de un conglomerado de comunidades y organizaciones más o menos abarcadoras y representativas y de propuestas políticas que, aunque todas ellas consideran el territorio como elemento central, presentan alcances significativamente distintos: en unos casos se plantea la recuperación individual o colectiva de tierras/terrenos que fueron usurpados; en otros, se lucha por la recuperación del territorio en un sentido holístico, sobre la reivindicación de la autonomía política y la autodeterminación. La radicalidad, entonces, de los distintos grupos varía y, con ella, las acciones que han emprendido y su proyección.

## Fuentes

*Azkintuwe*. Ver: <<http://www.azkintuwe.org/>>.

*Diario Uno*. Ver: <<http://www.diariouno.cl/>>.

*El Ciudadano*. Ver: <<http://www.elciudadano.cl/>>.

*El Mercurio*. Ver: <<http://www.elmercurio.com/>>; <<http://www.emol.com>>.

*La Tercera*. Ver: <<http://latercera.com/>>.

*Mapuexpress*. Ver: <<http://www.mapuexpress.net/>>.

*Movimiento Generación 80*. Ver: <<http://www.generacion80.cl>>.

*Observatorio Ciudadano*. Ver: <<http://www.observatorio.cl/>>.

Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO), Cronologías. Ver: <<http://www.clacso.org.ar/>>.

*ONG Liberar*. Ver: <<http://www.liberar.cl/>>.

*Punto Final*. Ver: <<http://www.puntofinal.cl/>>.

*Radio Bío-Bío*. Ver: <<http://www.radiobiobio.cl/>>.

*Radio Cooperativa*. Ver: <<http://www.cooperativa.cl/>>.

*Radio Universidad de Chile*. Ver: <<http://radio.uchile.cl/>>.

## Notas

1 En esa fecha se celebraron también las elecciones parlamentarias, de cuyos resultados nos interesa destacar que el Partido Comunista (PC) obtuvo tres diputados –Guillermo Teillier, Hugo Gutiérrez y Lautaro Carmona–, gracias a un pacto –instrumental– de no exclusión con la Concertación, lo cual constituyó un hito, pues permitió su regreso al Congreso después de 36 años.

2 La Concertación de Partidos por la Democracia nació en 1988, como Concertación de Partidos por el No, con motivo del plebiscito nacional del 5 de octubre de 1988, en el que derrotó al dictador Augusto Pinochet. Agrupó a amplios sectores de la oposición a la dictadura; actualmente está conformada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Partido Por la Democracia (PPD), el Partido Radical Social Demócrata (PRSD) y el Partido Socialista (PS).

3 Para consultar los resultados oficiales de las elecciones presidenciales 2009-2010, nacionales, regionales y por comuna, ver: <<http://www.elecciones.gob.cl/>>. Para ponderar mejor los resultados, hay que considerar que la abstención alcanzó en la primera vuelta el 12,83% de los inscritos; el porcentaje de votos emitidos, un 2,76% fueron nulos y un 1,19% blancos. Los porcentajes de votación de los candidatos están calculados sobre el total de votos válidamente emitidos, esto es, el 96,5% del total de emitidos. Por otra parte, en Chile votar es un deber y una obligación, por lo que no es baladí tener en cuenta el número de gente que a pesar de cumplir con los requisitos para inscribirse en los registros electorales, ha decidido no hacerlo y que asciende al 31% de la población en edad de votar. Ver: “Cárdenas, Juan Cristóbal. “Algunas verdades sobre el balotaje”; en *Movimiento Generación 80*, Columnas, 18 de enero de 2010.

4 Coalición de los dos principales partidos de derecha: la Unión Democrática Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN). Los otros dos candidatos fueron Jorge Arrate Mac-Niven, apoyado por el Partido Comunista (PC) y diversos sectores de la izquierda extraparlamentaria, y Marco Enríquez-Ominami Gumucio, quien se postuló como candidato independiente después de haber abandonado la Concertación y cuya amalgamada candidatura basada en las críticas a dicha coalición atrajo a significativos sectores de aquélla, descontentos con su legado, así como a votantes de derecha y a jóvenes tradicionalmente abstencionistas.

5 “Si tengo el privilegio de servirlos como Presidente, voy a ser un Presidente del cambio y de la

unidad nacional. Que restablezca la cultura de hacer las cosas bien y en forma honesta” dijo el entonces candidato Sebastián Piñera en el primer debate presidencial en televisión. Ver: *El Mercurio*, 24 de septiembre de 2009.

6 Nuevamente es necesario tomar los datos con mesura. En la segunda vuelta la abstención fue un poco mayor que en la primera, alcanzando al 13,26% de los inscritos. De los votos emitidos, un 2,63% fueron nulos y un 0,76% blancos. Ver: Cárdenas, Juan Cristóbal. *Op. cit.*

7 *El Mercurio On Line* (EMOL), 18 de enero de 2010.

8 Del cual el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) no alertó, provocando, con esa negligencia, más muertos y desaparecidos de los estrictamente inevitables.

9 *La Nación*, 27 de febrero de 2010.

10 El 17 de marzo, la Policía de Investigaciones continuaba con la captura de aquellas personas que habían tomado objetos de los supermercados o tiendas comerciales. Es preciso apuntar que la mayoría de los robos fueron de alimentos y productos de primera necesidad; también hubo gente que se llevó electrodomésticos o artículos electrónicos. Fueron varias las protestas de comunidades que quedaron completamente desamparadas y a las que la ayuda no alcanzaba a llegar. Por otra parte, en una sociedad en donde impera por sobre todo el mercado, en donde todo se compra y se vende, y en donde vale más el que más tiene, no es extraño que, ante situaciones en las que disminuyen o desaparecen los mecanismos de control, la gente decida tomar aquello que continuamente tratan de venderle, aquello que según la publicidad lo hará más exitoso, más feliz. Se trata, a nuestro parecer, de una expresión más del Chile neoliberal.

11 Concepto que alude a la tolerancia o impunidad en el caso de personas que han sido imputadas o condenadas por la comisión de un delito y son reinvidentes.

12 La medida finalmente fue aprobada por el Congreso en enero del año 2011 y los efectivos se incorporarán de manera escalonada en los próximos tres años. *La Estrella*, 7 de enero de 2011.

13 *La Tercera*, 11 de diciembre de 2010.

14 *Punto Final*, N° 706, del 2 al 15 de abril de 2010.

15 *El Mercurio On Line* (EMOL), 30 de abril de 2010.

16 Las huelgas legales, las únicas que registra y pu-

blica la Dirección del Trabajo, son aquéllas ocurridas en el marco del proceso de negociación colectiva entre la empresa y el/los sindicato/s. No se consideran, pues, todos aquellos conflictos que han derivado en paros de hecho o "ilegales".

17 Walder, Paul. "Movilización social ¡Así me gusta Chile!" en *Punto Final*, N° 724, 10 de diciembre de 2010.

18 Para comprender las razones históricas del conflicto chileno-mapuche, ver una síntesis en documento anexo.

19 El 16 de octubre de 2008 se produjo un enfrentamiento cuando el fiscal Mario Elgueta se encontraba de "visita" en la zona de Cañete. El 16 de diciembre, Héctor Llaitul y cuatro comuneros más implicados en este caso fueron absueltos por falta de pruebas.

20 *La Nación*, 19 de agosto de 2010.

21 Las regiones con mayor presencia mapuche y en donde ese pueblo reivindica derechos territoriales ancestrales son: Región VIII, del Biobío; Región IX, de la Araucanía; y Región X, de Los Ríos.

22 Entidad fundada a principios del año 2009 que representa a un centenar de comunidades de las comunas de Ercilla, Traiguén, Puerto Saavedra y Cunco, todas ellas en la Región de la Araucanía.

23 "Cronología del Conflicto Social-Chile" 2010 OSAL (CLACSO), Documento de Trabajo N° 631: pp. 2-3, febrero.

24 Piñera es propietario de un fundo de 2000 hectáreas en la localidad de Coique, en la X Región, que hace unos años estuvo ocupado por un grupo de mapuche, y también ha comprado terrenos en la Isla de Chiloé que también pertenecieron al pueblo mapuche (*El Ciudadano*, 3 de diciembre de 2005). En las regiones con mayor presencia mapuche (regiones VIII, IX y X), zonas fundamentalmente rurales, hubo una supremacía electoral clara de la derecha sobre la coalición gobernante. No obstante, algunas organizaciones mapuche llamaron a anular el voto.

25 *La Tercera*, 8 de junio de 2010, Editorial "Un nuevo trato en La Araucanía".

26 *La Segunda*, 28 de mayo de 2010.

27 *Azkintuwe*, N° 42, mayo-junio de 2010: p. 3.

28 Se refiere al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes vigente en Chile desde septiembre de 2009 que garantiza, entre otros, el derecho de consulta "a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente". Los énfasis son míos.

29 *Mapuexpress*, 8 de junio de 2010.

30 *El Ciudadano*, 28 de agosto de 2010.

31 *El Mercurio On Line* (EMOL), 12 de julio de 2010.

32 Esta ley, que ha sido aplicada casi de manera exclusiva al pueblo mapuche, convierte en actos terroristas acciones que, de constituir delitos, bien

podieran ser dirimidos por la justicia penal. Permite que personas sean acusadas de terrorismo por actos de protesta o reivindicación social. Además, otorga excesivas prerrogativas: establece tipos penales demasiado amplios que posibilitan su aplicación arbitraria a hechos que nada tienen que ver con el terrorismo; permite la mantención del secreto de la investigación por largos períodos, durante los cuales los procesados deben permanecer en prisión (porque, además, impide la aplicación de medidas cautelares distintas de la prisión preventiva); admite la figura de los "testigos sin rostro", testigos protegidos que dan su testimonio sin facilitar su identidad, lo cual se presta a acusaciones inventadas; y posibilita la interceptación de las comunicaciones del imputado. Finalmente, la ley antiterrorista establece una elevada penalidad, muy superior a la establecida en la legislación ordinaria.

33 En ocasiones los presos mapuche están sometidos a un doble procesamiento: por parte de la justicia civil y de la militar, lo cual resulta aberrante; más cuando es de sobra conocida la nula imparcialidad de la segunda y la impunidad en la que quedaron los asesinatos de los tres jóvenes mapuche acontecidos en los últimos años y perpetrados a manos de policías perfectamente identificados.

34 Dos semanas después del inicio de la huelga, el ministro de Justicia, de visita en el mismo penal en el que se localizaban algunos presos, declaró desconocer la situación en la que se encontraban. Ver: *Radio Bio-Bio*, página electrónica, 26 de julio de 2010.

35 Contribuyó al silenciamiento en torno a las reivindicaciones mapuche el "accidente" que tuvo lugar el 5 de agosto en la mina San José, a 30 km de Copiapó, cuando un derrumbe dejó enterrados a 33 mineros a unos 700 metros de profundidad, desconociéndose el estado en que se encontraban. Las sucesivas maniobras para tratar de rescatar a los mineros le sirvieron al Gobierno para desviar la mirada de la huelga de hambre de los presos mapuche, y de otros conflictos como el de la Isla de Pascua, como veremos más adelante. Finalmente, el 13 de octubre se consumó el rescate de los mineros, y todo ello fue aprovechado en un *show* mediático sin precedentes.

36 Varias personalidades y dirigentes destacados se pusieron también en huelga de hambre en apoyo a los mapuche presos; entre ellos el poeta Nicanor Parra, el actor Daniel Alcáino y el escritor Pedro Lemebel. Ver: *The Clinic*, 23 de septiembre de 2010.

37 *La Tercera*, 19 de septiembre de 2010.

38 Los políticos eran Hugo Gutiérrez (PC), Sergio Aguiló (PS), Tucapel Jiménez (PPD) y Manuel Monsalve (PS).

39 *La Nación*, 9 de septiembre de 2010.

40 *La Tercera*, 14 de septiembre de 2010.

41 *El Mercurio*, 24 de septiembre de 2010.

42 *La Tercera*, 27 de septiembre de 2010.

43 *El Mercurio On Line* (EMOL), 24 de septiembre de 2010.

44 *La Tercera*, 28 de septiembre de 2010.

- 45 *Radio Bío-Bío*, página electrónica, 1º de octubre de 2010.
- 46 Entre las reformas que ya se habían aprobado a la ley antiterrorista, a finales de septiembre, estaba la prohibición de aplicarla a menores de edad y la necesidad de demostrar la intención de causar terror.
- 47 Según los voceros de los presos de Angol, la propuesta del Gobierno no garantiza que no se vuelva a aplicar la ley antiterrorista a los mapuche. De todas las causas en las que está invocada esta ley, sólo en dos de ellas fue a petición del Gobierno; en las restantes, la aplicación de la ley antiterrorista responde a la solicitud de los fiscales, es decir, del Ministerio Público. Por otra parte, los ataques incendiarios seguirán siendo considerados delitos de tipo terrorista, aunque en el proyecto del Ejecutivo se prevé una rebaja de las penas. Tampoco se pone fin a la figura de los testigos encubiertos, simplemente se permitirá que los abogados defensores los interroguen. Y encima se agregarán las figuras del agente encubierto y del informante (delator pagado). No se le da respuesta satisfactoria, por lo tanto, a ninguna de las reivindicaciones que han levantado los presos políticos mapuche y que originaron la huelga de hambre.
- 48 *El Mercurio On Line* (EMOL), 1º de octubre de 2010.
- 49 *Diario Uno*, 17 de octubre de 2010.
- 50 "Comunicado de los Prisioneros Políticos Mapuche de la Cárcel de Angol (3 de octubre de 2010)" en: <<http://agrupacionmapuchekilapan.bligoo.cl/content/view/1023081/Presos-de-Angol-Esta-huelga-tiene-que-ver-con-lo-que-esperamos-para-el-futuro-de-nuestro-Pueblo.html>>.
- 51 *Radio Bío-Bío*, página electrónica, 8 de noviembre de 2010.
- 52 *Azkintuwe*, 7 de enero de 2011.
- 53 Héctor Llaitul –ex líder de la CAM– y otros cuatro comuneros ya fueron absueltos en diciembre por la Justicia Militar por no haberse encontrado pruebas de su participación en los hechos. Ver: *El Mercurio On Line* (EMOL), 16 de diciembre de 2010.
- 54 A la que sus habitantes llaman O Te Pito o Te Henua, que significa "el ombligo del mundo".
- 55 *Azkintuwe*, 22 de agosto de 2010.
- 56 *El Mercurio On Line* (EMOL), 9 de agosto de 2010.
- 57 *Radio Cooperativa*, página electrónica, 12 de agosto de 2010.
- 58 Agrupación creada en agosto de 2001 con el propósito de impulsar un movimiento social, así como la administración y distribución de las que consideran sus tierras ancestrales. Ver: *Azkintuwe*, 11 de agosto de 2010.
- 59 *La Nación*, 13 de septiembre de 2010.
- 60 *Azkintuwe*, 11 de agosto de 2010.
- 61 Aproximadamente 266 millones de dólares estadounidenses.
- 62 *El Mercurio*, 24 de octubre de 2010.
- 63 *Op. cit.*, 6 de enero de 2011.
- 64 *Radio Bío-Bío*, página electrónica, 23 de octubre de 2010.
- 65 *El Mercurio de Valparaíso*, 4 de diciembre de 2010.
- 66 *El Mercurio*, 30 de diciembre de 2010.
- 67 No obstante, hay que considerar las dificultades logísticas que se le plantean a cualquier movimiento social en Isla de Pascua, cuyo único lugar habitado y capital es Hanga Roa, con una población de 3.791 personas según el último censo del año 2002, y con los inconvenientes en términos de transportes y comunicaciones propios de una isla.
- 68 Para un seguimiento de este tipo de conflictos ver la página web del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA): <<http://www.olca.cl/>>.
- 69 *Radio Universidad de Chile*, Diario Electrónico, 25 de agosto de 2010.
- 70 Parece ser que la cuestión de la ubicación no es relevante en la legislación chilena sobre el tema. Es decir, las exigencias son las mismas para el proyecto, independientemente de que el lugar en donde quiera instalarse constituya un espacio de alto interés ecológico. Ver: *La Nación*, 25 de agosto de 2010.
- 71 *El Mercurio On Line* (EMOL), 25 de agosto de 2010.
- 72 Ver: <<http://www.salvemospuntadechoros.org/>>. La organización ambientalista Chao Pesca, creada hace un par de años, tuvo y tiene un importante papel en la denuncia de los proyectos termoeléctricos en la zona. Ver: <<http://www.chao-pescao.cl/>>.
- 73 *La Nación*, 26 de agosto de 2010.
- 74 *El Mercurio*, 31 de agosto de 2010.
- 75 *La Nación*, 27 de julio de 2010.
- 76 Floración de una gran diversidad de semillas que se encuentran en estado de latencia, entre los meses de septiembre y noviembre, en los años en que las precipitaciones superan el rango normal para el desierto.
- 77 *El Mercurio On Line* (EMOL), 22 de diciembre de 2010.
- 78 Quien también adquirió, a precios irrisorios el 67% del canal de la Universidad Católica, el canal 13. El grupo Luksic se consolidó en el año 2010, según el ranking que establece la revista *Forbes*, como el primer grupo empresarial chileno, ocupando el puesto 52 entre las mayores fortunas del mundo. Ver: *El Ciudadano*, 22 de marzo de 2010.
- 79 Depósito artificial de agua, que se forma haciendo una presa en un valle o quebrada.
- 80 *Radio Universidad de Chile*, Diario Electrónico, 29 de septiembre de 2010.
- 81 *El Ciudadano*, 17 de octubre de 2010.
- 82 Comunicado de los huelguistas de hambre de Caimanes, 20 de octubre de 2010. Ver: *El Ciudadano*, 24 de octubre de 2010.
- 83 *La Nación*, 25 de noviembre de 2010.
- 84 *El Observador*, 4 de noviembre de 2010.
- 85 *Op. cit.*, 16 de diciembre de 2010.
- 86 Dos ya habían tenido que abandonarla por problemas de salud y una por decisión propia.

- 87 *Radio Bío-Bío*, página electrónica, 17 de diciembre de 2010.
- 88 *Radio Universidad de Chile*, Diario Electrónico, 17 de diciembre de 2010.
- 89 *Diario Uno*, 3 de mayo de 2010.
- 90 *La Nación*, 4 de mayo de 2010.
- 91 *Op. cit.*, 20 de abril de 2010.
- 92 *Op. cit.*, 24 de octubre de 2010.
- 93 Por sorprendente que parezca, son las propias empresas impulsoras del proyecto las que contratan a los centros encargados de realizar estos estudios, lo que se presta a todo tipo de injerencia en los resultados de los mismos.
- 94 *Diario Uno*, 2 de noviembre de 2010.
- 95 *Op. cit.*, 6 de septiembre de 2010.
- 96 *La Tercera*, 7 de mayo de 2010.
- 97 *Op. cit.*, 8 de mayo de 2010.
- 98 *Op. cit.*, 8 de mayo de 2010.
- 99 *Op. cit.*, 12 de mayo de 2010.
- 100 *Op. cit.*, 6 de diciembre de 2010.
- 101 No todas las líneas o rutas del Transantiago están operadas por la misma empresa.
- 102 Increíblemente, el Gobierno traspasó los servicios prestados por la empresa en cuestión –Buses Gran Santiago– a la empresa Alsacia, mientras los trabajadores realizaban una huelga legal en el marco de un proceso de negociación colectiva. Los trabajadores realizaron manifestaciones al interior de la Catedral el día 13 de agosto por esta vulneración de sus derechos.
- 103 *El Mercurio On Line* (EMOL), 13 de agosto de 2010.
- 104 *La Nación*, 7 de agosto de 2010.
- 105 *El Mercurio On Line* (EMOL), 10 de agosto de 2010.
- 106 *El Mercurio On Line* (EMOL), 18 de julio de 2010.
- 107 *Radio Bío-Bío*, página electrónica, 5 de agosto de 2010.
- 108 *El Mercurio On Line* (EMOL), 26 de agosto de 2010.
- 109 *Óp. Cit.*, 8 de septiembre de 2010.
- 110 *Óp. Cit.*, 24 de noviembre de 2010.
- 111 *Óp. Cit.*, 24 de noviembre de 2010.
- 112 *Óp. Cit.*, 30 de noviembre de 2010.
- 113 *El Mercurio*, 30 de noviembre de 2010.
- 114 *El Mercurio On Line* (EMOL), 13 de diciembre de 2010.
- 115 *Óp. Cit.*, 16 de diciembre de 2010.
- 116 Recién en abril de ese año, tras el descalabro electoral, el entonces presidente del PS, Fulvio Rossi, había comprometido su apoyo a la CUT en su reivindicación de un reajuste del 10% del salario mínimo. Rossi había dicho: “La única manera de que nuestra acción política, como partido, recupere el vigor y seamos capaces de volver a conquistar la voluntad y la confianza de la gente, es apoyando a los trabajadores”. Ver: *El Mercurio On Line* (EMOL), 29 de abril de 2010.
- 117 *El Mercurio On Line* (EMOL), 16 de diciembre de 2010.
- 118 *Óp. Cit.*, 19 de diciembre de 2010.
- 119 Parte de un atractivo turístico que consiste en un recorrido por los antiguos yacimientos que se internan más de 20 metros por debajo del mar.
- 120 *El Mercurio On Line* (EMOL), 17 de noviembre de 2010.
- 121 *La Tercera*, 22 de noviembre de 2010.
- 122 *Radio Bío-Bío*, página electrónica, 29 de noviembre de 2010.
- 123 *El Mercurio de Valparaíso*, 12 de diciembre de 2010.
- 124 *El Líder*, 29 de diciembre de 2010.
- 125 *Óp. Cit.*, 3 de enero de 2011.
- 126 *El Mercurio de Valparaíso*, 8 de enero de 2011.
- 127 *La Tercera*, 26 de agosto de 2010.
- 128 *Diario Uno*, N°18, del 25 al 31 de julio.
- 129 *El Mercurio On Line* (EMOL), 28 de abril de 2010.
- 130 *El Mercurio*, 16 de junio de 2010.
- 131 *Radio Bío-Bío*, página electrónica, 26 de agosto de 2010.
- 132 *La Nación*, 11 de agosto de 2010.
- 133 *El Mercurio On Line* (EMOL), 18 de agosto de 2010.
- 134 *Radio Universidad de Chile*, Diario Electrónico, 8 de noviembre de 2010.
- 135 *La Tercera*, 20 de junio de 2010.
- 136 *Diario Uno*, N° 17, del 18 al 24 de julio, p. 12.
- 137 *El Mercurio*, 13 de mayo de 2010.
- 138 *El Mercurio de Antofagasta*, 2 de junio de 2010.
- 139 *El Mercurio*, 22 de enero de 2010.
- 140 *Óp. Cit.*, 28 de enero de 2010.
- 141 *El Mercurio On Line* (EMOL), 7 de julio de 2010.
- 142 *El Mercurio*, 17 de agosto de 2010.
- 143 *El Mercurio de Valparaíso*, 15 de agosto de 2010.
- 144 *El Mercurio*, 18 de agosto de 2010.
- 145 *Óp. Cit.*, 16 de agosto de 2010.
- 146 *El Mercurio On Line* (EMOL), 17 de agosto de 2010.
- 147 *El Mercurio*, 17 de agosto de 2010.
- 148 *Óp. Cit.*, 21 de agosto de 2010.
- 149 *Óp. Cit.*, 24 de agosto de 2010.
- 150 *El Mercurio On Line* (EMOL), 26 de agosto de 2010.
- 151 *El Mercurio*, 24 de diciembre de 2010.
- 152 En el interior del movimiento de pobladores – mundo heterogéneo y diverso donde los haya– existen profundas y múltiples fracturas. Una de las más importantes es la que se expresó con la escisión de una parte de pobladores de la original Andha Chile a Luchar (escisión de Andha Chile), para constituir la agrupación Andha Chile a Luchar Democrático, por diferencias con la dirigente Juana Silva, quien supuestamente sostendría fuertes vínculos con la derecha y especialmente con la UDI. De hecho, Andha Chile a Luchar no realizó protestas durante este primer año de Gobierno. Ver: *La Nación*, 17 de junio de 2007.
- 153 *Radio Universidad de Chile*, Diario Electrónico, 25 de noviembre de 2010.

154 *Movimiento Generación 80*, Noticias, 9 de marzo de 2010.

155 Óp. Cit., Noticias, 15 de abril de 2010.

156 *El Mercurio On Line* (EMOL), 8 de mayo de 2010.

157 *Movimiento Generación 80*, Noticias, 4 de junio de 2010.

158 Vecinizado público del Comité de allegados "Los Vecinos de Manquimávida". Ver: [http://resumen.cl/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2437:allegados-deponen-toma-en-manquimávida&catid=31:chiguayante&Itemid=74](http://resumen.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2437:allegados-deponen-toma-en-manquimávida&catid=31:chiguayante&Itemid=74)

159 *El Mercurio On Line* (EMOL), 23 de agosto de 2010.

160 *La Nación*, 23 de septiembre de 2010.

161 La Federación Nacional de Pobladores es un espacio de convergencia de una parte importante de organizaciones de pobladores sin casa de la región metropolitana; algunas de las principales organizaciones que lo conforman son: Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), Movimiento Pueblo Sin Techo (MPST), Andha Chile a Luchar Democrático y Movimiento por la Dignidad.

162 *Movimiento Generación 80*, Noticias, 16 de noviembre de 2010.

163 Óp. Cit., Noticias, 18 de noviembre de 2010.

164 Óp. Cit., Noticias, 20 de diciembre de 2010.

165 En algunos casos, esa solidaridad se concretó en hechos simbólicos como la huelga de hambre protagonizada por el diputado Gutiérrez; sin embargo, la poca consistencia del discurso y la praxis comunista se puso de manifiesto cuando, en enero de 2011, el propio presidente de la colectividad, Guillermo Teillier, votó a favor de acelerar el trámite de aprobación en el Congreso de un proyecto inconsulto para el presunto reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas que ratifica la violación del Convenio 169 de la OIT.

166 El grotesco "coqueteo" entre el PC y el PDC fue su-

biendo de tono a lo largo del año y llegó al extremo de que el presidente demócratacristiano, Ignacio Walker, al asistir a la clausura del XXIV Congreso del Partido Comunista a mediados de diciembre, admitió sólo diferencias de "matiz" entre ambos proyectos, lo cual no puede redundar sino en descrédito de los comunistas.

167 *The Clinic*, 18 de agosto de 2010.

168 En el Parlamento realizado en los Llanos de Quillín (conocido como "Las paces de Quillín") en 1641 los españoles reconocieron la independencia de Arauco estableciendo que la Corona española no tenía jurisdicción en ese territorio.

169 "Los hombres no nacieron para vivir inútilmente y como los animales selváticos, sin provecho del género humano; y una asociación de bárbaros tan bárbaros como los pampas o los araucanos no es más que una horda de fieras, que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en el bien de la civilización"; señaló *El Mercurio* de Valparaíso, el 24 de mayo de 1859. Ver: *El Ciudadano*, 18 de octubre de 2010.

170 Recién en 1993, mediante la ley indígena (aprobada durante el Gobierno de Patricio Aylwin) se cambió el nombre de "reducción" por el de "comunidad"; comunidad, sin duda, artificial en sus orígenes, nacida de la destrucción de las relaciones sociales propias del pueblo mapuche.

171 Para una excelente reconstrucción de la historia del pueblo mapuche, sobre todo en lo concerniente a la dominación y usurpación de su territorio ver: Correa Cabrera, Martín y Mella Seguel, Eduardo. 2010. *Las razones del illkun/enojo. Memoria, despojo y criminalización en el territorio mapuche de Malleco*. Santiago de Chile: Editorial LOM.

172 Las principales son Aukiñ Wallmapu Ngülam/ Consejo de Todas las Tierras, Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y Pu Lof Xawvn/ Alianza Territorial Mapuche (ATM).

---

# Chile

## Cronología del conflicto social de 2010

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Chile del OSAL.

### Febrero

#### Lunes 1°

Carabineros incrementa en 200 efectivos la dotación de Policía uniformada en La Araucanía. Ese mismo día se producen dos incendios en la zona, uno en un colegio y otro en un galpón.

#### Martes 23

La comunidad mapuche Ayün Mapu, con la presencia de voceros de la ATM, inicia la “recuperación” del fundo San Miguel, de 500 hectáreas, en la VIII Región.

### Marzo

#### Lunes 29

El gobierno dispone un impresionante despliegue militar y policial en el Día del Joven Combatiente; la jornada se salda con 97 detenidos, la gran mayoría en la Región Metropolitana.

### Abril

#### Miércoles 14

Más de 300 personas, agrupadas en la FeNaPo, se manifiestan frente a La Moneda solicitando a Piñera una reunión para abordar una solución integral a las problemáticas que enfrentan.

#### Viernes 16

Un grupo de miembros del Parlamento Rapa Nui ocupa la plaza de la Gobernación en Hanga Roa (Isla de Pascua), exigiendo la destitución del recién nombrado

gobernador Pedro Edmunds, así como cambios en el estatuto administrativo de la isla y un aumento en el control migratorio.

### **Viernes 23**

Se produce la primera recuperación de tierras durante el gobierno de Piñera. La acción pacífica tiene lugar en el Fundo Makewe, con la presencia de la ATM.

### **Miércoles 28**

Los estudiantes, secundarios y universitarios, convocados por la AME, se manifiestan en Santiago por el alza del transporte. Exigen el congelamiento inmediato de la tarifa de transporte escolar y adulta en todo Chile, el restablecimiento del pase provisorio para todos los estudiantes del país, la restitución de la venta de boletos individuales en el *metro*, y la validez de los certificados de alumno regular. Los estudiantes son dispersados por Carabineros, con gases lacrimógenos.

## **Mayo**

### **Sábado 8**

Más de 4 mil mineros subcontratados de la mina Doña Inés de Collahuasi toman los accesos al mineral y se declaran en huelga indefinida, después de haber presentado un pliego petitorio a la empresa que no tuvo una respuesta satisfactoria. Exigen la mejora de las condiciones del campamento en donde se alojan, el cual presenta graves problemas de hacinamiento y otras deficiencias. Los trabajadores denunciaron desigualdades en el trato –en materia de alimentación y atención de salud– entre los trabajadores de planta permanente y los subcontratados.

### **Miércoles 12**

Los universitarios, convocados por la Confech, realizan una marcha, a la que se suman los estudiantes secundarios, para exigir mejoras en la educación. Los más de 4 mil estudiantes congregados denuncian que el ministro de Educación, Joaquín Lavín, no ha respondido al petitorio que le hicieron llegar con la solicitud de aumentar la cuantía y el número de becas de ayuda para los estudiantes de las zonas afectadas por el terremoto.

### **Lunes 24**

Comunidades que integran la ATM protagonizan en la madrugada diversos “cortes relámpago” en varios caminos de La Araucanía, luego de que finalizara el plazo que le habían dado al gobierno para instaurar una mesa de diálogo.

## **Junio**

### **Martes 1°**

Cerca de 4 mil estudiantes –universitarios y secundarios– marcharon en Santiago convocados por la Confech para exigir el aumento del monto de las

becas de emergencia; la apertura de un debate sobre el Aporte Fiscal Directo hacia los planteles y la promoción de créditos con aval en desmedro del Fondo Solidario.

### **Lunes 7**

Comunidades integradas en la ATM protagonizan 12 cortes en importantes carreteras de acceso a las ciudades de La Araucanía, “en defensa del territorio”.

### **Miércoles 16**

Los estudiantes secundarios intentan realizar una marcha para protestar por la cuarta subida consecutiva, en lo que va del año, de las tarifas del Transantiago. La manifestación no cuenta con autorización de Carabineros; se producen altercados y una treintena de detenciones de estudiantes. Éstos se toman las oficinas de la Junaeb y hacen públicas sus peticiones en una rueda de prensa.

## **Julio**

### **Jueves 1º**

Unos 600 conductores de Transantiago se declaran en paro, por el no pago de sus imposiciones por más de 15 meses.

### **Lunes 12**

Inician una huelga de hambre 32 presos políticos mapuche para exigir la derogación de la Ley Antiterrorista, el término de los testigos sin rostro o protegidos del Ministerio Público y el fin de los procesamientos simultáneos, tanto en la justicia civil como militar.

## **Agosto**

### **Jueves 5**

Los empleados públicos, congregados en la ANEF, inician movilizaciones a nivel nacional para hacer sentir su malestar por los despidos injustificados.

### **Viernes 6**

Unos 5 mil trabajadores de Correos, de los 5.700 que tiene la empresa aproximadamente, inician una huelga para exigir un reajuste salarial.

### **Martes 24**

La Corema de Coquimbo aprueba el proyecto Barracones, para la construcción de dos centrales termoeléctricas en el sector de en Punta de Choros. Se convocan movilizaciones a través de las redes sociales en las principales ciudades del país, mismas que son reprimidas con bombas de gases lacrimógenos y carros hidrantes.

**Jueves 26**

Multitudinaria marcha de estudiantes convocada por la ACES que confluyó con la concentración de los empleados públicos que habían decretado un paro nacional para el día de hoy para expresar su disconformidad por los 2.500 despidos injustificados en el sector.

**Septiembre****Jueves 9**

Los diputados Sergio Aguiló, Manuel Monsalve, Tucapel Jiménez –de la Concertación– y Hugo Gutiérrez, comunista, inician un ayuno después de visitar a los presos mapuche de la cárcel de Temuco.

**Viernes 24**

Se inicia la mesa de diálogo propuesta por el gobierno, en el cerro Ñielol de Temuco. Ni los voceros de los presos políticos ni el mediador, monseñor Ezzati, asisten, por considerar que no atiende a las reivindicaciones que motivaron la huelga de hambre.

**Lunes 27**

Comienzan una huelga de hambre 11 pobladores de Los Caimanes –en la región de Coquimbo– para exigir que la minera Los Pelambres cierre el tranque de relave de residuos tóxicos (el Mauro) que amenaza con desbordar y sepultar la comunidad.

**Octubre****Viernes 1º**

Deponen la huelga de hambre los 23 presos políticos mapuche. Los comuneros de Angol y Victoria continúan con la medida por considerar insuficientes las promesas del Ejecutivo.

**Noviembre****Viernes 5**

Unos 1.500 trabajadores de la mina de cobre Doña Inés de Collahuasi inician una huelga tras desacuerdos en la negociación de un nuevo contrato colectivo. Exigen aumentos en el sueldo base y en los bonos de educación, jubilación y salud. La empresa continúa con las actividades, empleando trabajadores de reemplazo.

**Martes 16**

Unos 200 pobladores protagonizan una toma simbólica en un sector de La Pintana –comuna del sur de Santiago– para protestar por las modificaciones que el gobierno pretende introducir en materia de política habitacional que, según los manifestantes, dificultaría el acceso a los subsidios al exigir mayores montos de ahorro.

**Miércoles 17**

Un grupo de 33 mujeres que el día anterior se había tomado la mina el Chiflón del Diablo en protesta por el cierre de los planes de empleo implementados a raíz del terremoto, inicia una huelga de hambre.

**Miércoles 24**

Comienza el paro nacional de la ANEF en protesta por el porcentaje de reajuste de sueldos de un 3,7% que les ha ofrecido el gobierno para el año 2011, distante del 8,9% que están solicitando. Según datos de la ANEF el paro habría tenido un 90% de adhesión, lo que significa que unos 400 mil empleados habrían paralizado sus actividades.

**Lunes 29**

Los trabajadores portuarios de San Antonio inician un paro de actividades protestando por el nulo acuerdo de mitigación que mantienen con la empresa portuaria.

**Martes 30**

La ANEF inicia un paro de 48 horas contra el ajuste salarial del gobierno, tras un fracaso en las negociaciones para llegar a un acuerdo.

**Diciembre****Viernes 3**

Carabineros efectúa un brutal desalojo en un inmueble fiscal ocupado en Isla de Pascua.

**Martes 7**

Nuevo paro nacional convocado por la ANEF.

**Lunes 13**

La ANEF reinicia las movilizaciones, paros y protestas para exigir al gobierno un reajuste salarial satisfactorio.

**Miércoles 15**

Continúan las movilizaciones de la ANEF por un reajuste salarial. 15 trabajadores públicos se toman por más de cuatro horas la Catedral Metropolitana de Santiago a la espera de que se vote en el Senado el reajuste salarial para su sector.

**Viernes 17**

Los 8 pobladores de Los Caimanes que todavía permanecían en huelga de hambre depusieron esta acción por graves problemas de salud.

**Miércoles 29**

Carabineros efectúa un violento desalojo en la plaza principal de Hanga Roa (Isla de Pascua), que un grupo de familias Rapa Nui mantenían tomada por más de 9 meses.

**Lista de siglas**

<b>Sigla</b>	<b>Institución, Organización o Partido</b>
ACE	Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios
AME	Asamblea Metropolitana de Estudiantes
ANEF	Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
ATM	Alianza Territorial Mapuche
Confech	Confederación de Estudiantes de Chile
Corema	Comisión Regional de Medio Ambiente
FeNaPo	Federación Nacional de Pobladores